

Presentación al Volumen 3, Número/Issue 2, correspondiente al segundo semestre del 2003.

Índice de contenido:

- ✉ Risha Gidwani, (Sociology, Univ. de California Santa Cruz), "*Coca Production and Eradication in Bolivia: The 'Development' of Human Rights Infractions through IMF and US Policies*".
- ✉ Raúl Prada Alcoreza, (COMUNA, UMSA), "*El Motín*".
- ✉ Alberto Zalles Cueto (Sociologie, Univ. Laval Quebec), "*Campesinos 'sin tierra': el ciclo de la minifundización agraria en Bolivia*".
- ✉ Guillermo Delgado P. (Estudios Latinoamericanos, Univ. de California Santa Cruz) "*Cincuenta años después: el 3 de Agosto de 1953 en una carta informativa*".
- ✉ Alvaro Romero Marco (Departamento de Lenguas, Universidad de California Santa Cruz), "*Recordar Engendrando: 'De la ventana al parque'*".

Este volumen 3, número/issue 2, corresponde al segundo semestre del 2003. Entre otras cosas, este mes (julio) se celebra en La Paz (Bolivia) la Segunda Reunión de la Asociación de Estudios Bolivianos/Bolivian Studies Association bajo la coordinación del Guillermo Mariaca, (Literatura, Universidad Mayor de San Andrés). También saludamos desde esta *RevistaE* al nuevo presidente de la asociación, **Fernando Unzueta**, (Departamento de Literatura, Universidad de Ohio) y reconocemos el esforzado e inaugural trabajo de la ex-presidente Josefa Salmón (Loyola Univ). La Asociación ha sido organizada bajo un formato transnacional y tiene por integrantes a todas las personas interesadas en investigar la problemática boliviana tanto en el país como en universidades alrededor del mundo.

En esta ocasión la *RevistaE* de Bolivian Research Review desea compartir con el público lector los siguientes artículos. La investigadora de post-

grado, **Risha Gidwani**, Sociología, Universidad de California (Santa Cruz), escribe "Coca Production and Eradication in Bolivia: the 'development' of Human Rights Infractions through IMF and US. Policies". El ensayo trata sobre la producción de la coca (*erythroxyllum coca*) y la problematiza analizando las políticas del Fondo Monetario Internacional y las de EEUU que la interesectan. Su texto yuxtapone las posibles ramificaciones que éstas habrían creado en relación a los derechos humanos (sobre todo en el área rural) y el progreso económico del país. La autora sugiere repensar los usos económicos legales de la planta en cuestión que, de acuerdo a ella, favorecería a la economía nacional.

Sin distanciarse de esta lectura y como una especie de efecto colateral, **Raúl Prada Alcoreza**, de COMUNA y la Universidad Mayor de San Andrés (La Paz) comparte su artículo "El Motín". Esta contribución es un ensayo que analiza los hechos de febrero (2003) a la luz de la politología. Ya trascendió el hecho que Bolivia experimentó un conflicto social de estructurales dimensiones en el que el Estado de derecho sufrió un retroceso y en el que enfrentamientos fratricidas, por poco, descarrillan la frágil democracia que se respira en el país. En el trasfondo emergió un movimiento social de considerable envergadura.

Alberto Zalles Cueto, candidato doctoral de la Universidad de Laval (Quebec) contribuye con un artículo por demás interesante y que titula "Campesinos 'sin tierra': el ciclo de la minifundización agraria en Bolivia". Zalles, utilizando los datos censales más recientes, y una perspectiva sociológica analiza el fenómeno de los campesinos "sin tierra". El texto comunica una crisis que se ha profundizado mucho más desde la suspensión de la reforma agraria y la redefinición de esta reforma traducida en la emergencia de las nuevas medidas creadas por el INRA y que tienen paralelos con la implementación del modelo neoliberal a partir de 1986. Las repercusiones están en la mesa del debate.

La construcción del espacio discursivo y la cotidianidad surgen en un texto de características históricas escrita por **Guillermo Delgado P.**, Departamento de Estudios Latinoamericanos, Univ. de California (Santa Cruz). Esta deconstrucción textual analiza la narrativa de una Carta Informativa mimeografiada y emitida por el gobierno revolucionario en Agosto de 1953 y que el autor recientemente encontró entrepapelado en una vieja biblioteca familiar. En este texto se disecciona un documento oficial que narra los acontecimientos transformadores de Abril de 1952, y

específicamente los hechos de Agosto de 1953 que coinciden con la emisión del decreto de la reforma agraria. En efecto han transcurrido cincuenta años.

Finalmente, **Alvaro Romero Marco**, Departamento de Lenguas, Univ. de California (Santa Cruz) dedica una crítica con una luminosa mirada madrileña de la cuarta edición (2003) de “De la Ventana al Parque” del autor chaqueño **Jesús Urzagasti**. El editor de esta *RevistaE* alentó el encuentro entre Romero Marco y el escritor chaqueño que como becado por LASA (Latin American Studies Association), deleitó con sus conferencias a estudiantado y profesorado californiano en las universidades de Santa Cruz, Berkeley y Davis. Stelle Tarica (Berkeley) y Rodolfo Meyer (Davis) sirvieron de anfitriones. En Dallas, sede del encuentro de LASA, Urzagasti, comentó una sesión dedicada a su escritura coordinada por Josefa Salmon (Universidad de Loyola), con textos de Norma Klahn, Ana Rebeca Prada, y el suscrito. Bajo el auspicio de Nicasio Urbina (Univ. de Tulane). Urzagasti, a manera de epílogo, participó con la poeta cubana **Nancy Morejón** de una bella lectura pareada de poesías suyas, “La poesía ve lo sucesivo como simultáneo”—escribió alguna vez José Lezama Lima.

Entre otras notas trascendentales que vale la pena referir aquí está el trabajo fílmico de **Adrián Caetano**, director de “*Bolivia*”, un drama socio-realista, que transcurre contra el trasfondo de la capital bonaerense donde habita una notable diáspora boliviana. El film retrata la experiencia diaria del sobrevivir de un inmigrante indocumentado—las malas lenguas se esmeran en decir 'ilegal', un miscible joven boliviano que trabaja en un restaurant. El film hizo su debut y recibió merecidos aplausos en el Film Forum de la ciudad de Nueva York. El tema nos recuerda un texto de **Alejandro Grimson** titulado: “*La Otra Bolivia: el mundo de los migrantes en la Argentina*”, *Revista Cultural Literaria, Presencia*, (La Paz), 1 de diciembre de 1996. El film de Caetano coincide, por esas cosas del azar, con la re-edición celebratoria de los 30 años de la composición “Bolivia” del legendario **Gato Barbieri**. En esta pieza las deslumbrantes notas del saxo-tenor del El Gato se plegan a los acordes del piano de Lonie Liston Smith.

El editor agradece a los lectores anónimos y a los colaboradores por sus contribuciones a este volumen. Asimismo extiende la invitación para enviar artículos y estudios originales a investigadores, académico/as y

estudiosos/as de las problemáticas bolivianas. El próximo volumen saldrá a comienzos del año 2004.

Guillermo Delgado P.

Editor

Departamento de Estudios Latinoamericanos

Universidad de California Santa Cruz

Coca Production and Eradication in Bolivia: Detrimental Effects of IMF and US policies on Economic Progress and Human Rights

✉: Risha Gidwani

Department of Sociology
University of California Santa Cruz

Risha Gidwani, is currently a doctoral student in the Sociology Department at the University of California Santa Cruz, specializing in Sociology of Health and Economics. This is her first article. She can be reached at: rishagidwani@yahoo.com

ABSTRACT/RESUMEN

This paper discusses the current social and economic situation in Bolivia as a result of coca eradication strategies imposed by the United States and neoliberal economic programs imposed by the International Monetary Fund. The paper gives consideration to the militarization of Bolivia by the United States government and to the lack of realistic alternative development strategies enacted by the U.S. to help strengthen the economy. The author examines also the effects of IMF programs on social and economic stability and reviews debates regarding neoliberalism. She contends that both U.S. and IMF programs hamper economic growth and presumably constitute—paradoxically—a menace to social stability. Likewise, U.S. alternative programs prove to be detrimental to Bolivia's progress as an economically stable state and independent nation. The author concludes with suggestions to ameliorate poverty and economic insecurity by considering using coca (*Erythroxylum coca*) for medicinal purposes and for industrial sub-products instead of for the processing of cocaine.

Table of Contents

	Introduction
I.	Background about Bolivia
II.	U.S. Involvement in Bolivia
III.	Military Presence
IV.	Economic factors surrounding coca and eradication
V.	Problems associated with reduced authority of Bolivian government
VI.	Problems with Bolivian accordance with Foreign Policies
VII.	Human Rights Infractions
VIII.	Need for Increased Authority of Bolivian State
X.	Why are these problems occurring?
X.	Conclusions
	Bibliography

INTRODUCTION

The focus of this paper is to examine the impact of U.S. foreign policy and IMF and World Bank policies on Bolivia's social and economic conditions. As a result of severe economic crisis in the mid 1980s, the Bolivian government was forced to take out significant loans from the U.S., the International Monetary Fund and the World Bank. Conditions accompanying these loans required that Bolivia adapt its economy to satisfy the above-mentioned powers. The U.S. demanded that Bolivia eradicate coca, the plant from which cocaine is derived, and the export which yields the Bolivian economy the greatest profit. The IMF stipulated that the Bolivian state impose a neoliberal model and lessen state involvement in the economy. In this paper, I suggest that when examined separately, U.S. and IMF policies are harmful to the development of the Bolivian economy. Furthermore, when such policies are examined in relation to one another, we see that they are contradictory and are thereby ensuring that Bolivia will not be able to make economic progress.

I begin this paper by detailing the importance of coca to the Bolivian economy and follow the history and effects of the U.S. War on Drugs in Bolivia. I next discuss IMF policies and their effect on the Bolivian economy, and then delve into the contradictions between the U.S. and IMF policies. After examining the authoritarian influence of these policies, I suggest that the U.S. and IMF have become dominant global rulers and detail the negative effects the hegemony of their values has on the quality of life of the Bolivian peasants, and the economy in general. Although the literature abounds with the negative impacts IMF programs have on economic growth, there has been less attention paid to U.S. foreign policies regarding the War on Drugs. In the case of Bolivia, I posit that although IMF policies are not beneficial for Bolivia, it is the U.S. foreign policy that is doing the most damage to Bolivia's economic, political, and social welfare. I end the paper with

suggestions about how to ameliorate the current economic and social situations in Bolivia through the use of coca for medicinal purposes, or other sub-industrial, legal uses.

BACKGROUND ABOUT BOLIVIA

Bolivia is one of the poorest countries in Latin America; its annual GDP average is approximately \$1000 US dollars per capita (World Bank Group). By comparison, the US per capita GDP is \$36,300 US dollars (www.cia.gov). Almost one third of Bolivia's population survives on less than one US dollar per day. The United Nations Development Programme considers 23 percent of the population, or almost 2 million people, to be undernourished (WOLA). In Bolivia, 75,000 families, or approximately 300,000 people, depend on the coca plant for their livelihood. Coca related business employs about 20 % of the adult workforce. Flavio Machicado, the former Bolivian finance minister, estimates that another 300,000 jobs depend on the coca economy. The coca plant provides the raw material with which to extract cocaine. Coca is first transformed into coca paste and is exported to other South American countries where it is then purified into cocaine and exported to mainly North America and Europe. Cocaine, the refined commodity, is classified as a topical anesthetic and a central nervous stimulant. The coca plant has proven to be a stimulant as well, for the Bolivian economy.

Bolivia's economy is struggling to remain viable; currently in debt of billions of dollars to the World Bank and the International Monetary Fund, Bolivia is one of the most beholden nations in the world and one of the poorest nations in South America. After Bolivia encountered financial crisis in the mid-1980s, the IMF, the world's foremost international lending institution, loaned billions of dollars to the Bolivian government to assist it in stabilizing the national economy. Conditions accompanying the IMF loan required that Bolivia adapt its economy to the neo-liberal

strategies. Neo-liberal economic policies are those that limit the role of the state and encourage privatization of markets.

The coca plant is by far Bolivia's most profitable export and the country produces mass quantities of it. Bolivia is second in the world only to Peru in coca production. It is important to stress the distinction between coca and cocaine. Cocaine is only one of many alkaloids present in the coca plant. The combination of all of the alkaloids in the coca leaf makes consuming the coca leaf a markedly different and milder experience than ingesting cocaine. For over 2000 years, Andean people have used the coca leaf, either chewing it or brewing it as a tea to help starve off hunger and fatigue. Life in the high elevation of the Andes is difficult and many of its inhabitants use the coca leaf to energize themselves, much like Americans use coffee to fuel their workdays. The coca leaf also provides medicinal benefits, such as aiding digestion, and alleviating altitude sickness, which is important for the peasants who toil in the highly elevated Andean region. The leaf also carries religious and spiritual significance for the Bolivian indigenous population.

Coca has proven to be a hardy plant. It grows well in poor soil and requires no pesticides. Planting coca on the steeply sloping hillsides of the Chapare region has helped reduce the incidence of landslides and soil depletion. The coca plant can be harvested multiple times per year, and the leaves prove more easily transportable than alternative crops, an important factor to take into consideration when realizing that most farmers have to traverse poor roads carrying their goods on their backs. The U.S. Agency for International Development concluded that the coca plant is actually better for the Bolivian Yunga soil because it drains fewer nutrients from the soil than other endemic plants.

U.S. INVOLVEMENT IN BOLIVIA

Since the 1970s, there has been a global increase in demand for cocaine, with much of the demand originating from the United States. As a result, Bolivia began exporting coca for the production of cocaine. Coca proved to be Bolivia's most profitable cash crop (Potter and Farthing 2000). In the past, Bolivia exported its legal natural resources, relying heavily on tin and natural gas to sustain its economy. But in 1985, the price of tin dropped by almost 54 % (Andreas 1995). A year later, the price of natural gas plummeted. Much of Bolivia's industrial workforce found itself lacking legitimate means of survival and migrated to the Chapare region to grow the still profitable coca. Economist Samuel Doria Medina estimated that in 1987, 1.5 billion U.S. dollars were generated from coca exports, which represented approximately 29% of the GDP (Andreas). This is a significant amount for a Southern country and would greatly aid Bolivia in repaying its considerable debts to the IMF and U.S. as well as being a catalyst for the struggling economy. However, the U.S. War on Drugs has taken a supply-side reduction stance and has exerted great political and financial pressure on the Andean governments (comprised of Colombia, Peru, and Bolivia) to eradicate their coca crops. Unfortunately, there are few alternative crops and goods for export which would enable Bolivia to repay its significant debts. The alternative crops that do exist only produce a fraction of the income that the coca plant generates, thereby ensuring that many Bolivians will starve due to lack of adequate income. Oddly enough, the U.S. demands that Bolivians endure severe financial and physical hardship to lessen a drug problem which is not their own, but also that of the U.S and Europe. Wisely, already in 1995, Andrew Weil wrote for example: "To get crack off American streets, Washington wants to eradicate coca. But Andean Indians contend that it is a mistake to demonize the plant they hold sacred, and a surprising new coalition of scientists and politicians agrees." (1995: 70).

MILITARY PRESENCE

Although the U.S. formally said they agreed with alternative development, its goal was to militarize the Andean region (Quieser Morales) 2002). The U.S. has always advocated increased military involvement in the drug war. Bolivia has had its own armed forces involved in the drug trade for two decades now. In 1983, a special police corps, UMOPAR (Mobile Unit of Rural Patrol), was created. Although today UMOPAR is responsible for combating the narcotics trade, it has not always engaged in anti-drug policing. On June 30, 1984 they helped the army stage an armed coup against the government. The three UMOPAR officers who were leading the coup were allegedly involved in drug trafficking. Ultimately, the coup was not successful, but as Malamud-Goti notes, it demonstrates that drug trafficking is an integral part of Bolivian life. It also shows that the UMOPAR forces will not hesitate to take over a government if they disagree with their policies (1992). This unstable relationship between the government and the armed forces makes for very uncertain times.

In addition to these two forces, the U.S. government has also pushed for the involvement of the Bolivian military in the anti-drug effort, threatening that unless their military was involved, the U.S. would withdraw aid to Bolivia (WOLA). This seems odd considering that the Bolivian military used to be involved in narcotics trafficking. But the U.S. does benefit economically from Bolivian military involvement. In 1997, the Clinton Administration lifted its ban on selling heavy arms to Latin America. This lift happened after McDonnell Douglas and Lockheed Martin lobbied intensely to be able to sell arms to Latin America. Bolivian peasants, as well as the Bolivian Senate, voiced their opposition to involving the army in drug policing, but then President Paz-Zamora made a pact with the U.S. government agreeing to involve the armed forces. He had previously admitted that they would cause "unnecessary violence" and had originally wanted more

demand side reduction [as I will discuss later, the policies of the Bolivian government are heavily influenced by the U.S. because of the U.S.'s status as a money lending institution]. In the past, the military engaged in coca trafficking, [the issue has been documented by Theo Roncken (1998), Eds. Note], so to have them now involved in coca eradication hampered their legitimacy. Their presence increase tensions with the local population that have witnessed many of the human rights abuses the past governments have created. The U.S. has not just advocated involvement of the Bolivian military in the drug war, but also inserts its own armed forces. There is a strong U.S. military presence in South America; soldiers from the U.S. army's Special Forces are in Bolivia as well as 40 Drug Enforcement Administration (DEA) officers. In addition to the Bolivian military, peasants view the presence of foreign power in their lands with suspicion (Quieser Morales 2002). This has the overall effect of increasing social discontent and increasing political instability.

Ironically, the policing of the drug war has resulted in increased manufacture and marketing of cocaine and an increase in producing and trading coca paste (WOLA 2002). This increase is a direct result of U.S. policies. The U.S. War on Drugs increased state and military involvement, making coca harder to procure and thereby increasing the going price. The high price of coca combined with the poor state of the economy (due to the economic crisis of the 1980s and subsequent economic stagnation) attracted many more persons to the coca economy. As a result of more people becoming involved in producing coca, the market was flooded with supply, thereby dropping the price. In order to sustain the same amount of economic input, peasants began earning extra income by processing coca leaves into coca paste themselves.

ECONOMIC FACTORS SURROUNDING COCA AND ITS ERADICATION

Coca is responsible for generating about \$300-500 million for the Bolivian economy (Quieser Morales 2002), a hugely significant amount for a struggling market. Because this is such a considerable economic process, alternative means of sustenance need to be available to Bolivian peasants if they are to eradicate their coca plants. In principle, the U.S. government agreed to the implementation of alternative development, but the plan has yet to be brought to satisfactory fruition. Money that the U.S. has earmarked for alternative development is being used instead for capital investments or debt repayment, not for the introduction of alternative crops. As Arganaras notes, The Declaration of Principles of the Bolivian-U.S. antinarcotics program states that "The terms 'Alternative Development' shall be used in the context of any activity or economic contribution destined to a Social Compensation Fund, to Bolivia's balance of payments, and to long-term investments to facilitate the transition to an economy that will replace the one resting on coca" (1997: 60). However, if money and resources are to be diverted to paying off debts and to capital investments, this does not aid the farmers who now have no crops to plant or money to buy food. The money which has been lost from eradicating coca is being directly taken away from the peasants, or the micro level sectors of the economy. However, the U.S. aid in response to the eradication is, in many cases, not reaching the peasants, but is being used to help more macro sections of the economy through balance of payments and foreign investments.

Despite the ease of growing coca, many farmers were willing to switch to another crop in order to comply with U.S. policies. Although peasants in the Chapare region tried to grow macadamia nuts, coffee, pineapples, black pepper, cocoa, oranges and bananas, none of these crops were as profitable as coca (Quieser Morales 2002). Many peasants also carry goods on their back to sell at the market, and poor roads make carrying these cumbersome goods awkward. These coca growers exist on sustenance level only and have little surplus food or money; to ask them to grow

less profitable crops is essentially asking them to starve. To ask Bolivians to sacrifice their coca income with no substitute is unfair and worsens their already poor quality of life.

In the Chapare region of Bolivia, where most of the country's coca is grown, many persons participating in alternative developments "efforts" report that there is no response or communication from the Bolivian government to the Chapare residents regarding sustainable agriculture. Bolivians state that the U.S. has dispensed security aid quickly, but has been very slow in distributing funds for development (Atkins 1998). I suggest that this illustrates again the U.S. priority of militarization versus human rights. What money is being directed towards alternative development is often appropriated by high ranking Bolivian officials. Corruption at the level of the Bolivian government is widespread and well documented (Gamarra 1997, Atkins 1998). The United Nations Office on Drug Control "estimated that only 23-50% of families in the Chapare had received any alternative crop assistance" (Quieser Morales 2002). Many coca growers are being forced to abandon their means of survival without being given any replacement means to support themselves. Furthermore, eradication efforts (funded by the U.S. government) are so vigorous that coca is being destroyed before comparable sustainable agriculture has had a chance to generate income (WOLA 2002). Alternative crops need time to be planted and harvested before they yield any profit. Therefore, there exists a time lag between when coca is eradicated and when alternative crops yield profit. Not only is this time lag highly unattractive to peasants who are being told they must destroy their means of survival, but it also creates a significant population that is going hungry.

PROBLEMS ASSOCIATED WITH REDUCED AUTHORITY OF THE BOLIVIAN
GOVERNMENT

Although coca eradication threatens both the economic and physical safety (through military involvement) of Bolivians, Bolivia has little choice but to comply with the wishes of the United States. The country has limited state and government capacity, rendering it difficult to affect structural change. It does not have the resources or state capability that is needed for a country to maintain an autonomous foreign policy. Rather, Bolivia must bow to U.S. demands. History has demonstrated that heeding to U.S. demands is necessary for Bolivia's advancement. In the early 1980s, the government of President Hernán Siles Zuazo did not, in the eyes of the U.S., devote enough resources to the Drug War or promote market privatization as vigorously as the U.S. wished. As the first democratically elected president since 1965, Zuazo was focusing more on domestic issues, such as solving internal problems of recession, re-democratization, and massive labor strikes. However, the U.S. was dissatisfied with his performance and diverted hundreds of millions of dollars that were earmarked for economic recovery and used it instead for market privatization and the drug war. I suggest that this demonstrates the War on Drugs and market privatization is more important to the United States than strengthening a stable Bolivian economy. U.S. aid is directly linked to Bolivian compliance with U.S. wishes, even when those wishes are not in the best interests of Bolivia. Bolivia is so dependant upon foreign aid that presumably it gives more preference to U.S. wishes than to regional, local, or national interests. In 1988, Bolivia passed Law 1008, *the Coca and Controlled Substances Law*, that made cultivating the coca leaf illegal, an activity that has traditionally been practiced by natives for thousands of years. Quieser Morales states that "the law was the direct result of intense external pressure and lobbying brought to bear by the U.S. Embassy and U.S. foreign policy initiatives" (2002: 8). Bolivia's sovereignty has been weakened as a result of bending to U.S. wishes of an anti-narcotic policy, which challenges the interests of Bolivian citizens and the Bolivian economy. Bolivia's situation is further complicated

by the fact that the IMF and the U.S. are asking it to engage in contradictory economic processes. The IMF's neoliberal economic policies require that the state step away from control of the market. However, the Bolivian government (especially the Presidents) gave in to U.S. pressure to make cultivating coca illegal, thereby increasing state involvement in the coca dominated economy.

The failure of the U.S. War on Drugs is widely documented. Supply side reduction tactics have proven to be especially futile. Despite the U.S. spending tens of billions of dollars on supply side reduction, *there is now more coca being produced in South America than there was prior to US involvement* (Quieser Morales, WOLA). Although the amount of coca being produced in Bolivia has decreased, production has simply shifted to Colombia. Analysts refer to this as the balloon effect: as soon as production of coca is squashed in one area, it pops up in another area, much as air does when being squeezed in a balloon. As noted previously, the greater amount of coca flooding the informal market makes its price drop and hurts the Andean peasants who depend on it for a living. Furthermore, the purity of cocaine has increased; coca leaves are now being grown to have the highest cocaine content possible to cater to the demands of the cocaine imbibing public, which resides mainly in the United States and Western Europe. This situation leads me to question the utility of the U.S. War on Drugs. At this point, the U.S. War on Drugs is failing, the Bolivian peasants are starving, the Bolivian economy is flailing, and the IMF's loans are remaining unpaid. No one seems to be profiting from this state of affairs.

PROBLEMS WITH BOLIVIAN ACCORDANCE WITH FOREIGN POLICIES

As the current situation stands, Bolivia will have an extraordinarily difficult time in pulling itself out of its economic stupor, for the IMF and the U.S. are pulling the country in different directions. However, a closer look at these two powerful interests reveals that they are not distinct

entities, but integrally connected. The U.S. has an extremely strong presence in the IMF. The U.S. has approximately 372,000 votes in the IMF, which is almost three times that of the second most powerful country (Japan). The U.S. is also the only country that has veto power in the IMF (Stiglitz). This affords the U.S. a disproportionate amount of decision making power in the IMF. Under the 1988 Omnibus Law on Drug Abuse, if a country is deemed to be uncooperative with U.S. drug control strategies, the representatives to the international lending institutions must vote against giving that country financial assistance (Atkins 1998). So, Bolivia must comply with U.S. anti-drug demands not only out of fear that the U.S. will stop funding, but that any assistance from the IMF will be terminated as well.

In the 1980s and 1990s, Bolivian presidents incorporated the neoliberal economic reforms advocated by the IMF and thereby exacerbated the already poor socioeconomic situation of peasants and workers. The privatization of market increased social inequality and worsened poverty, thereby pushing Bolivians towards coca production. Only some people at the top of the socio-economic ladder benefited from the neoliberalism. This privatization largely had the result of increasing social instability, which Quieser Morales postulates was a “significant disincentive to further foreign investment, which in turn was desperately needed to support sustained economic growth and state funded social welfare and anti-poverty measures” (2002: 17). According to Quieser Morales, Bolivian market privatization did more to harm economic and social situations than it did to help them. Ironically, the one sector that has actually prospered under neoliberal economic policies is the coca sector (Andreas 1995). Quieser Morales notes that

“drug dollars, once estimated at \$500 million a year, alleviated the harsh socioeconomic fallout from extensive market privatization and orthodox economic austerity reforms implemented in the 1980s and 1990s. When the formal economy recovered, the success was attributed to neoliberal economics, and Bolivia became a model for successful free market reform. A counter view held that drug profits have fueled Bolivian economic recovery by generating

hundreds of thousands of jobs and billions in exchange earnings and capital investments." (2002: 14).

Przeworski and Vreeland (2000) found that IMF programs actually impair economic growth. Controlling for external variables, the authors examined growth of countries while under IMF programs and concluded that while a country remained under IMF policies, its growth was retarded. IMF policies were shown to have no impact on growth after a country terminated participation in IMF economic programs. Furthermore, the countries that experienced the most rapid growth were those which were never involved in an IMF program.

HUMAN RIGHTS INFRACTIONS

As a result of the contradiction between neoliberal strategies advocated by the IMF and World Bank and the increased state involvement demanded by the U.S. government, the Bolivian economy has become quite unstable. A consequence of poor economic conditions is that social welfare conditions become even more inferior. Many Bolivians lack adequate nutrition or access to education or health services, especially in rural areas. What social welfare services do exist, have been provided by coca traffickers (Malamud-Goti 1992). Cocaine and coca exporters are providing better social services for the peasants than the Bolivian governments, so the peasants naturally ally with the coca producers.

Human Rights Watch contends that the U.S. antinarcotics effects pose a grave threat to democracy and human rights. They contend that "the U.S. attitude also appears to reflect a determination not to be distracted from the principal goal of combating drug trafficking, and a willingness to overlook human rights violations that arise in pursuit of that goal" (1995). Law 1008, the Coca and Controlled Substances Law, is denying civil rights to many persons. A 1995

report by Human Rights Watch reveals that the prisoners who are held under Law 1008 have to endure severe overcrowding and abysmal conditions, including lack of proper hygiene facilities.

Police in the Chapare region

“run roughshod over the population, barging into homes in the middle of the night, searching people and possessions at will, manhandling and even beating residents, stealing their goods and money. Arbitrary arrests and detentions are routine. A number of Bolivians detained on drug trafficking charges allege torture by Bolivian law enforcement personnel. They also allege DEA complicity with abusive interrogations. The DEA personnel acknowledged that they do not interfere to stop abuse” (1995).

Law 1008 is sending many people to jail but has not helped slow the production and distribution of coca. It has however, ensured that many people serve prison time for crimes they have not been convicted of, for Article 109 of the law denies bail to those arrested. Furthermore, the conditions under which they serve time are atrocious. Innocent people are being detained in prison without due process as a direct result of U.S. influence (Human Rights Watch).

A look at the laws of the U.S. government reveals that the U.S. military aid to Bolivia is unlawful. The Leahy Law, which was passed in 1997 as part of the State Department's International Narcotics Control program, specifically prohibits U.S. military assistance to foreign governments who commit human rights infractions. Historically, the Bolivian military has been the greatest threat to democracy. After January 1990, Bolivian army officers received training at the School of the Americas in Georgia in how to combat drug trafficking. This was the same school that trained “the worst violators of human rights in the 1970s” (Malumud-Goti: 1992: 40) in Latin America. In 1996, the U.S. Department of Defense revealed that tactics advocated at the School of the Americas included blackmail, torture, and false imprisonment (NACLA). According to the Leahy law and the above conclusions of Human Rights Watch that do confirm infractions upon civil liberties, the U.S. should withdraw its armed forces from Bolivia.

By ignoring the demands and interests of the Bolivian peasants and putting their own first, the U.S. constitutes a threat to the democracy of Bolivia. McSherry notes that “the volatile Andean region...provides stark evidence that in crisis situations, U.S. economic and security interests still outrank promotion of democracy and human rights” (33) and that instead of working for the safety of the free world, the U.S. is attempting to dominate it (2000). The U.S. is using its own military presence, the involvement of the Bolivian military, and the threat of withdrawing economic aid to dominate the Bolivian region.

NEED FOR INCREASED AUTONOMY OF BOLIVIAN STATE

Not only is the U.S. War on Drugs failing, but the IMF policies have proven to be ineffective and unproductive as well. Since 1985, Bolivia has adopted neoliberal economic policies. Eighteen years of market privatization has shown no benefit for the Bolivian economy. At this point, Bolivia is in need of a state that develops its economic infrastructure to the point where it can become viable and fairly self-sufficient look out for public welfare. Steiglitz notes that rapid privatization (as advocated by the IMF) can create monopolies. For example, if the government releases control of the telephone industry and the economy is unstable (making access to the market unequal), one company can corner the market and raise prices on telephone services, creating a monopoly and unfair service prices. This points to the need for markets to be privatized slowly, with the state helping to stabilize infrastructure and ensure that there exists market competition and not market monopolies. Even the four Asian tigers (Taiwan, China, South Korea, and Japan) who are often cited as an example of the success of the IMF neoliberal policies had interventionist states. Markets cannot be separated from social forces and political influence. Economic forces pervade all aspects of life within a nation-state; political, social, and economic forces are inextricably tied

(Stiglitz). I posit that the role of the state is to make sure these various forces are progressing and co-existing properly. Once social and political stability exists, (which it cannot without economic stability), the role of state in the market can then be limited. As Block notes, there is a growing literature detailing the positive aspects of a developmental state in promoting economic growth in Japan, South Korea, Taiwan, Hong Kong, and other late industrializers in Western Europe (1994). Joseph Stiglitz posits that “IMF policies not only exacerbated the downturns [of the economy] but were partially responsible for the onset: excessively rapid financial and capital market liberalization was probably the single most important cause of the [East Asian] crisis” (2002: 89). The literature also suggests that continuing state involvement is necessary in the market because levels of private investment can fluctuate dramatically. Therefore, the state needs to ensure there exist sufficient levels of capital involvement and that foreign investment does not leave a country during a slow time, thereby creating a recession, or that it does not flood the domestic market during a boom, thereby increasing inflation.

Social forces can influence market forces, and vice-versa. The forces that shape the market play a significant role in its outcome. If the state is shaping the market it will incorporate its political ideology; if an outside institution such as the IMF is shaping the markets it will incorporate its own ideologies. The point is, markets will always be shaped by some sort of ideology; the key is to make sure that the forces that shape the market are those which look out for the greatest common good. IMF policies call for privatization of the market, which does create inequality because it reduces public welfare.

The state has historically been responsible for instituting and maintaining social welfare programs. When privatization occurs, social welfare is usually the first program to be cut. When noting that countries which need assistance from the IMF and World Bank are in such poor shape

that their social welfare is already suffering, we see that if social welfare programs are further cut, the social situation becomes even more precarious. The IMF website itself notes that the IMF is not an aid agency: its purpose is to deal with balance of payments problems and to restore sustainable economic growth to the environment (www.imf.org). The way it purports to do this is through market privatization. Although privatization of the market does promote competition, which is healthy for economic growth, the state needs to ensure that the market does not become so cutthroat that it bodes poorly for social welfare. However, if the international lending agencies are only poised towards economic privatization and not towards social welfare, there needs to exist some sort of organization that looks out of public welfare. I suggest that this role should fall to the state. Not only is proper social welfare crucial from a moral point of view, but it is necessary from an economic point of view as well; without social stability, economic progress will be limited by the lack of attraction for foreign investments (Stiglitz 2002).

As McSherry notes, “neoliberal models imposed on much of the region have undermined democratic struggles by citizens to make their voices heard and fight for their rights” (27). I propose that Bolivia is in need of a state that promotes domestic industry and a diversification of exports. Once the economy becomes more stable, Bolivia can step away and allow capital investment to fuel industry and the domestic private sector to flourish. If the Bolivian state helps itself to become stable, it will also be more attractive to foreign investments.

States such as Bolivia do not seem have autonomy in determining the creation of and the level of state involvement in the market, but must comply with the wishes of the U.S. and the IMF, who are more likely to be obsessed with economic efficiency than with human rights. Just as Block notes that the modern state privileges its own citizens over foreigners, the IMF privileges its own interests over outside interests, including the interests of indebted nations. In fact, this happens

with any dominant global power. The U.S. state is using the Bolivian market to satisfy U.S. interest while harming Bolivian interests. Although the U.S. imposes drug laws on Bolivia in the name of the greater common good and in the name of morality, I want to propose that the real reason for U.S. action is that by blocking Bolivia from exporting its most profitable commodity, this keeps it economically unviable and therefore unable to constitute an economic and military threat to the United States. Stiglitz notes that “those with vested interests...benefit from keeping out the goods produced by the poor countries” (xv). I suggest that one of the goods that dominant global powers want to keep out of the global economy is coca, for it would generate enough income to make Bolivia economically viable, and therefore would constitute a threat to the success of other capitalist countries.

Interestingly, the policies advocated by the IMF and the U.S. treasury (which are both ruled largely by Westerners) are not instituted in their own countries. “Most of the advanced industrial countries...had built up their economies by wisely and selectively protecting some of their industries until they were strong enough to compete with foreign companies” (Stiglitz 2002: 16). There needs to exist some state involvement so that domestic industries can become strong enough to compete with outside interests. However, the IMF and the US advocate that the state step out of the market and rapidly. Capital market liberalization and market privatization, however, can be problematic: if accomplished too quickly, it can lead to a recession (Stiglitz). Essentially, these global powers are asking other countries such as Bolivia to engage in harmful economic practices that they themselves deliberately avoid.

The Bolivian state needs to be separate from the sole influence of the dominant class, so that the state can pursue democratic interests. The interests of the dominant class are not always in the best interests of the populace, for the dominant class usually acts in self interest while the role of the

state is expected to act in the public interest. The state needs a certain amount of autonomy so that the government and bureaucracy can maintain effective control of both the decision-making and the policy-making process, and thus be able to supervise the range of competing interests. There is a growing body of evidence demonstrating the positive effect *some* government intervention can have on economic stability and progress. In Malaysia for example, government control of capital flows through exit tax, and capital controls in India and China proved beneficial (Steiglitz). The Bolivian government, however, lacks state autonomy desperately needed to produce markets capable of legal, open capital exchange. Instead it must take direction from the IMF. Interestingly, the persons who run the IMF are mainly bank managers, who represent the wealthiest people from the wealthiest countries.

Even though the IMF's capital is created through taxation of member countries citizens (Stiglitz), it is not held publicly accountable for its decisions; the IMF does not give the public (whose taxes create the capital it lends with) access to its documents and meeting histories. Joseph Steiglitz notes that "the policies of the international economic institutions are all too often closely aligned with the commercial and financial interests of those in the advanced countries" (20).

In Bolivia, there needs to exist updated regulatory mechanisms. Another benefit to having the state as the institution to control these regulations is that it is more publicly accountable than any institutions, including non-governmental organizations. But in order for the state to improve and implement regulatory mechanisms, there needs to endure social stability. However, Bolivian governments lack continuity, creating political instability, which triggers poor economic and social conditions. In this case, the withdrawal of U.S. anti-narcotics programs will greatly ameliorate existing social conditions. By legalizing the growth of coca (for medicinal, traditional, and even sub-industrial purposes) Indigenous people will be able to generate enough income to satisfy their

basic needs, resulting in less rioting and less social discontent. Taxes from the coca economy would also aid the state in creating and maintaining economic progress through debt repayment and having domestic capital to invest in domestic enterprise.

Coca, as detailed before, has been used by the Andean people for thousands of years as a medicinal plant. Cocaine is but one of many alkaloids synthesized from the coca plant, just as THC is only one of many alkaloids present in the cannabis plant. The experience of ingesting cocaine versus coca is markedly different. Coca (not cocaine) has nutritional and medicinal qualities. The coca leaf contains over 2000% more calcium than condensed milk, slightly more protein than meat, and substantial amounts of vitamin B-1. Erowid.org, a very well respected and science based drug information website, notes that "by virtue of its compositions it is a powerful energy restorer for curing stomach and digestive ailments, alleviating affections of the larynx and vocal chords, preventing vertigo, regulating arterial pressure, and the metabolism of carbohydrates, and even of improving sexual prowess" (www.erowid.org 2003). Because of coca's nutritional and medicinal qualities, the coca leaf has been invaluable in providing energy and sustenance to the indigenous people. It also assists in reducing hunger and fatigue. A product with such effects would find a huge market in our fast paced American society, where millions of people, regularly, take drugs or other supplements to help them concentrate, keep them awake, or aid in weight loss. Already pharmaceutical companies discover a natural product and try to synthesize it in the lab, because it proves to be cheaper. However, since all the alkaloids present in the coca leaf are needed to produce the above mentioned medicinal benefits, it is more cost efficient for the pharmaceutical companies to buy the leaf from the Bolivian peasants and then utilize it for pharmaceutical use.

WHY ARE THESE PROBLEMS OCCURRING?

Why do all of these economic and social problems persist if there exists an understanding of the situation? The U.S. and the IMF have both lent billions of dollars to Bolivia. Ironically, because of conditionality accompanying the loans, Bolivia cannot generate enough income to pay back those debts. Years of supply side reduction tactics have demonstrated no drop in the amount of cocaine being produced in South America, or consumed by other countries. Examples of other late industrializing countries reveal that market privatization strategies are not advantageous to economic progress. What has been demonstrated quite clearly is that IMF and U.S. policies are keeping the Bolivian economy stagnant. I suggest that the IMF and U.S. persist in promoting their economic and social dogma as a way to serve self-interest; the U.S. and the IMF have diverging interests than Bolivia. Increasingly, power is moving away from the nation states to international organizations such as the IMF, World Bank, and the WTO. The U.S. has also shifted from being simply a nation state to also being an international lending institution. In this age of globalization, markets are linked to one another, creating a global economy. If the IMF and U.S. want to be successful in the global economy, they need to make sure that they are economically superior.

As noted previously, the IMF and the U.S. are demanding that borrowing countries engage in economic processes that they themselves avoid. The United States is asking Bolivia to engage in free market reforms and coca eradication, which bodes poorly for state-market relations and makes everyday life very precarious. The United States is instituting policies in Bolivia that are highly effective in rendering the country economically unviable and politically unstable. I want to suggest that this is in the best interests of the U.S. The War on Drugs is a highly effective way of keeping other countries fallible; therefore, these countries cannot constitute a significant economic or military threat. Even though supply side reduction tactics have proven to be a failure, the U.S. persists in pushing its agenda of coca eradication. The U.S. views its own economic and safety

interests as superior to Bolivia's and is imposing their views on the Bolivian people. Disregarding the complaints of the Bolivian people and leaders, the U.S. is instituting policies which take away Bolivia's natural resources. The IMF is instituting policies that are directly against Bolivia's economic progress and social stability. Bolivia is powerless to do much because of its inferior military and economic status.

A developed society needs other societies to be underdeveloped for a developed society to exist. These "developed" capitalistic societies need somebody's resources to exploit. The idea of development as beneficial to all is erroneous; the U.S. and IMF's economic success depends on keeping other economies unviable and underdeveloped.

CONCLUSION

There needs to exist some level of Bolivian state autonomy separate from the interests of the U.S. Essentially, the U.S. War on Drugs is the wrench in the properly functioning economic machine (although IMF policies need to be rethought as well). Without the U.S. decree that coca should be eradicated, the IMF, the Bolivian economy, and the Bolivia peasants could all work together to satisfy mutual interests. At this point, supply side reduction tactics are directly responsible for generating larger numbers of people who go hungry. Economic uncertainty compounded by U.S. eradication policies has directly contributed to social instability and political unrest. For example, in February of 2003, coca growers organized mass protests in Bolivia after the Bolivian government announced a 12.5% tax increase, which would hurt the already poor population. After riots ensued and the police went on strike, President Sanchez de Lozada's entire cabinet resigned.

Today, the power inequalities that were so glaring in the age of the colonizers still exist, but have become less obvious to the untrained eye. However, domination is now occurring through economic force rather than military force. Economic programs are being forced upon countries when studies show that they do more harm than good, and through a dominant power forcing its morals upon a less powerful country. The nation-state now enjoys less power over its territory. As Castells points out, in this age of globalization, the nation-state has reduced levels of sovereignty but is trying to regain this sovereignty by becoming aligned with other nation-states and forming partnerships like NAFTA and the European Union (2000). However, the requirements for admission into these alliances are quite high, rendering acceptance, and therefore sovereignty, available to only the most elite nations, creating power inequalities at a more macro level. In this post-colonial age, the power has moved away from the nation-state to international organizations, such as the IMF, the World Bank, and alliances like NAFTA. The level of power these organizations exert over countries with poorly developed economies is significant.

The major problems currently facing Bolivia are economic, social and political instability. If the U.S. ceased their involvement in Bolivian coca production, then neoliberal economics may be able to help Bolivia. However, in Bolivia's case strict neoliberal economics should not be constituted right away. There needs to first exist a state which allows market competition to flourish (but also avoids monopolies) and public welfare to become stable, and then, when the economy and social welfare programs are strong enough, the state can cut back its involvement, thereby appeasing the IMF. Stiglitz advocates that both privatization and liberalization of the economy has to happen in a deliberate and planned manner. Privatization has to happen slowly in order to avoid market monopolies and liberalization needs to happen slowly because new jobs need to be created before trade barriers are dismantled (2002). But in the case of Bolivia, if the U.S.

withdrew its anti-coca demand, the jobs already exist- now they will just be part of the formal sector and will generate revenue for the economy. That way, the Bolivian state will be able to generate enough money to pay back debts and then once it has become more stable, adapt to some market privatization.

Although many persons contend that it is the IMF's policies which are causing the most social and economic problems for third world countries, I posit that although their policies are not beneficial, in this case it is the U.S. policies that are causing the most harm. Even if the IMF withdrew its demand for market privatization, Bolivia would still be in a sad predicament because it depends so strongly on the coca economy to generate its income. It is preposterous to say that Bolivian peasants should dramatically alter their way of life and abandon their livelihood to appease a drug problem which is not their own, but that of the United States. To ask for such is to again ensure that the third world suffers greatly because of the policies of the first world, as they did in the age of the colonies. The US government is trying to improve the quality of life in the US by reducing supplies of coca, but by doing so, the U.S. is succeeding in only decreasing dramatically the quality of life in Andean countries.

Furthermore, as shown above, not only is the demand for eradicating coca debilitating the Bolivian economy and heightening political and social tensions, but the major result of eradicating coca in Bolivia is that production has increased in Colombia; there is a net increase overall in coca production in the South American region. Therefore, in order to ameliorate Bolivia's condition, the U.S. needs to re-evaluate its supply side reduction stance. Bolivia is so poor and drugs are so profitable that there will always be people willing to take the risk and supply coca. As Coletta Youngers of the Washington Office on Latin America (WOLA) notes, "to date no viable alternative to coca exists for the region" (9; see also The Economist 2000). U.S. thinks that cocaine

trafficking is a serious threat to democratic institutions, but when any organization or nation-state attempts to tell its citizens and the citizens of the world whether or not they can engage in altering their own mind states, that organization or nation state threatens personal freedom and individual democracy. Furthermore, attempting to stop coca production in Bolivia has proven to be a serious threat to personal freedoms and quality of life. In persisting in believing that supply side reduction is the answer when reality shows otherwise, all the U.S. is doing is limiting the economic potential for Bolivia and engaging in human rights infractions by denying Bolivians their only means of survival.

There is however, a different solution to the current problem which may appeal to all parties involved. The coca leaf could be utilized for its medicinal properties and for its nutritional components. Such a product would benefit not only those persons looking to better their health, but the abundant natural resource would generate large amounts of money for the struggling economy as well as gainfully employing hundreds of thousands of Bolivian peasants. In using the coca leaf legally, the Bolivian economy benefits because it is generating income, the U.S. benefits because many of these pharmaceutical companies are U.S. based and therefore will generate income (through taxes) for the U.S. economy, the peasants do well because they can sell their crop for a decent price, and the IMF can be appeased because the state does not have to be deeply involved in this exchange for it to occur, and the revenue generated from the exchange will help pay off debts to the IMF. There are, however, problems that exist with this approach. The Bolivian state would have to ensure that the peasants were getting a fair price for their crop, and that the revenue generated from coca benefited the domestic economy and did not all flow into the pockets of foreign investors. These issues deal more with patent rights and Intellectual Property Rights and are

the subject of another paper. Before any conclusion is made, however, the input and advice of the Indigenous people who work in the coca sector must also be considered.

At this point, we can say with confidence that US and IMF programs by themselves, seem to be harming the Bolivian social and economic situations. Both are ensuring that the Bolivian market will remain in a state of uncertainty, thereby exacerbating the already poor economic and social conditions.

BIBLIOGRAPHY

- Andreas, P. (1995). "US Policies at Cross-Purposes in Latin America." *Third World Quarterly*. 1995; 16 (1).
- Argarañas, F.G. (1997). The Drug War at the Supply End: The Case of Bolivia. *Latin American Perspectives*, 24(5), 59-80.
- Atkins, A. 1998. "The Economic and Political Impact of the Drug Trade and Drug Control Policies in Bolivia" Pp. 97-115 in *Latin America and the Multinational Drug Trade*, edited by E. Joyce and C. Malamud. New York: St. Martin' s Press.
- Bebbington, A. (1997) "New States, new NGO's? Crisis and transition among Andean rural development NGO's", *World Development* Vol. 25 (11).
- Block, F. (1994). "The Roles of the State in the Economy". In N.J. Smelser and R. Smelser (eds.) *Handbook of Economic Sociology* Princeton: Princeton University Press.
- Bolivian Chapare Coca Growers Resist Eradication- Indiscriminate Use of Violence by Joint Task Force.
- Castells, M. (2000). " Materials for an Explanatory Theory of Network Society" *British Journal of Sociology*. Volume 51, 1: 5-25.
- Chande, M.,. (2002). "Bolivia and USA wage war on the coca leaf farmers." *The Lancet*, November 16, Volume 360: pp. 1573.
- Coffin, P. O. (1998). "The Curse of Coca: The Move to Use a New Herbicide to Eradicate the Coca Plant Spells Trouble for South America' s Rainforests." *Down to Earth*, July 31; 7(5): pp. 22-23.


- Crow, B. and Thomas (eds.) 1988. *Survival and Change in the Third World*. New York: Oxford, U.P.
- De Franco, M. and Godoy, R. (1992). "The Economic Consequences of Cocaine Production in Bolivia: Historical, Local, and Macroeconomic Perspectives." *Journal of Latin American Studies*, 24 (2), 375-406.
- Drug Policy Alliance (2002): Drug Treatment vs. Supply Side Measures. Ms.
- Erowid.org. Accessed March 2003 (http://www.erowid.org/plants.coca.coca_info1.shtml).
- Farthing, L. (1997). "Social Impacts Associated with Antidrug Law 1008" Pp 253-269 in *Coca, Cocaine, and the Bolivian Reality*, edited by M. B. Leons and H. Sanabria. New York: SUNY.
- Gamarra, E.A. (1997). "Fighting Drugs in Bolivia: United States and Bolivian Perceptions at Odds" Pp 243-252 in *Coca, Cocaine, and the Bolivian Reality*, edited by M. B. Leons and H. Sanabria. New York: SUNY.
- International Monetary Fund. Accessed February 15, 2003. (<http://www.imf.org>).
- International Monetary Fund (2002). "Crafting Bolivia's PRSP: 5 Points of View" *Finance and Development*, 39 (2).
- Jenkins, R. (1991). "The Political Economy of Industrialization: A Comparison of Latin American and East Asian Newly Industrializing Countries". *Development and Change*, 22, 197-231.
- Kabeer, N. (1994). *Reversed Hierarchies in Development Thought*. London, New York: Verso.
- Keller, Paul (2000) "Bolivian 'Dignity Plan' Attempt to Eradicate the Crop have Provoked Violent Clashes. Fight Against Coca Leaf Leaves Bitter Taste." *World News: Latin America*, September 27, p.3.
- Leons, M. B. (1993). "Risk and Opportunity in the Coca/Cocaine Economy of the Bolivian Yungas." *Journal of Latin American Studies*, 25 (1), 121-157.
- Leons, M.B. and Sanabria, H. 1997. "Coca and Cocaine in Bolivia" Pp.1-46 in *Coca, Cocaine, and the Bolivian Reality*, edited by M. B. Leons and H. Sanabria. New York: SUNY.
- Madrick, J. (1998). "The IMF Approach: The Half Learned Lessons of History" *World Policy Journal*, Pp 39-42.

- Malumud, Goti, J. (1992). *Smoke and Mirrors: the Drug Wars in Bolivia*. Boulder: Westview Press.
- McSherry, J.P. (2001) "Preserving Hegemony: National Security Doctrine in the Post-Cold War Era". *Report on the Americas (NACLA)*, XXXIV (3), 26-34.
- Potter, G. A. and Farthing, L. (2002) *Bolivia: Eradication and Backlash*. October 2000. Volume 5 (38). Retrieved March 14, (<http://www.fpif.org>).
- Przeworski, A. & Vreeland, J.R. (2000). "The Effect of IMF Programs on Economic Growth" *Journal of Development Economics*, 62, 385-421.
- Quieser Morales, W. (2002) "Toward a New Bolivian Foreign Policy?: The Past, Present, and Future State Capacity and Bolivian Foreign Policy." *Bolivian Research Review*, Vol. 2 (1) (www.bolivianstudies.org/eng1/journal/2002.02.pdf)
- Roncken, Theo (1998) "De Narcoaviones y protección policial en Bolivia." EN: Martin Jelsma (comp). *Drogas, Poder y Derechos Humanos*. Quito: Abyayala, pp: 49-68 [Ed Note].
- Stiglitz, J. 2002. *Globalization and its Discontents*. New York: W.W. Norton & Co.
- The Drug War Across Borders: U.S. Drug Policy and Latin America. Breaking the Chains: People of Color and the War on Drugs*. Conference Sept. 26-28, 2002. Los Angeles, CA.
- The Economist. (2000) "The Andean Coca Wars. A Crop that Refuses to Die". March 4, pp.23-25.
- The World Bank Group: Bolivia Country Brief. Accessed February 12, 2003. (<http://www.worldbankgroup.com>).
- Thomas, A. (2000). *Poverty and Development into the 21st Century*. Oxford.
- United Nations General Assembly Special Session: *World Drug Problem*. New York, NY. June 8-10, 1998.
- Weil, Andrew (1995) "Letter from the Andes. The New Politics of Coca." *The New Yorker*, May 15, pp.70-80
- WOLA (Washington Office on Latin America). 2002. "Going to the Source: Results and Prospects for the War on Drugs in the Andes"
- Youngers, C. "Part I: A Fundamentally Flawed Strategy: The U.S. "War on Drugs" in Bolivia" *Washington Office on Latin America*. Issue Brief #4 September 19, 1991.

Youngers, C.(1995). *Fueling Failure: U.S. Drug Control Efforts in the Andes*. The Washington Office on Latin America; April.

ANÁLISIS

El Motín

 Raúl Prada Alcoreza
Integrante de COMUNA; Profesor de la UMSA (La Paz)
Director del Doctorado en Epistemología

En un significativo análisis sobre el periodo crítico de la República flamante, el primer periodo republicano, durante el lapso político de los gobernantes llamados bárbaros ilustrados, Carlos Montenegro encontraba en el motín un significativo síntoma del vacío político. La crisis, la fragilidad política, la irresolución orgánica de una sociedad que no termina de encontrar sus partes, se expresan en ese síntoma dramático que es el motín. También habla del cuartelazo. Montenegro decía más o menos lo siguiente: el motín sintetiza el vacío del poder. En un trabajo perdido, durante las persecuciones de la dictadura de García Meza, escribí sobre el motín, usando este enunciado de Montenegro. En aquél escrito se decía que el golpe del polémico General Natusch Busch respondía al vacío de poder que dejaba una decrepita y carcomida dictadura, instaurada contra el movimiento obrero y la Asamblea Popular, en aquel fatídico todos santos de entonces, cuando se dio la asonada golpista, en complicidad con algunos políticos y partidos comprometidos con la dictadura del General Banzer Suárez desde un inicio (1971). Dictadura que forma parte de los gobiernos de facto auspiciados por el Estado y los gobiernos norteamericanos, en el contexto de la guerra fría. Antecedieron a este hecho las fraudulentas elecciones que llevaron al fante del General Pereda Asbun a una tramposa victoria, cuya convocatoria se debió también a una sedición golpista contra en otrora líder de los oficiales de derecha del ejército. Estos oficiales detentaron la jerarquía y dominaron los mandos durante periodos prolongados.

Desde 1964, año del golpe del caricaturesco general René Barrientos Ortuño, hasta ese entonces, momento del llamado golpe de todos santos, los sectores reaccionarios del ejército tenían la hegemonía de los mandos y de las decisiones, salvo si contamos con el interregno nacionalista de izquierda de los generales Ovando y Torres. Incluso con anterioridad al golpe asociado al General Pereda, quien fungía de ministro de gobierno del mismísimo General Banzer, se dieron intentos de golpe contra el ya prolongado gobierno banzerista. Quizás el

más serio fue el protagonizado por oficiales de rango de Cochabamba, que no culminó con ninguna modificación política. Como puede verse, desde 1964 hasta aproximadamente 1981 se vivió una sucesión de cuartelazos, que marcaron el ritmo de la política en Bolivia, incluyendo el cruento golpe del General García Meza. Con la ascensión al poder de Hernán Siles Suazo y la Unión Democrática y Popular (UDP) culmina este ciclo de motines, cuartelazos y gobiernos de facto militares.

La competencia y el celo institucional entre policías y los militares son conocidos de modo anecdótico desde la revolución de 1952, cuando los carabineros, como se los llamaba, se unen a la insurrección social. Esta competencia interinstitucional va a ser mantenida por los gobiernos del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) durante los doce años de asenso y declive revolucionario. En realidad la táctica del calificado como estadista y dos veces presidente Paz Estensoro, de aquellos doce años del nacionalismo revolucionario, era mantener el delicado equilibrio político haciendo competir los poderes de tres fuerzas del Estado y la sociedad, que se encontraban en relativa pugna: las Fuerzas Armadas, la policía y la Central Obrera Boliviana. Este equilibrio, como se sabe, se rompe poco a poco desde 1956, cuando se aplica lo que podría ser el primer plan de ajuste estructural, hasta 1963, cuando se producen verdaderos enfrentamientos entre las milicias mineras y el ejército en la zona de Sora Sora. Durante el último años de los gobiernos del escindido nacionalismo revolucionario se da la más insólita conspiración entre el entonces vicepresidente de la república, el General Barrientos, sectores del MNR, bajo la conducción de Hernán Siles Suazo y el connotado líder sindical Juan Lechón Oquendo, incluso se dice que el Partido Comunista (PC) se hallaba comprometido en esta conspiración golpista.

Esta disputa entre policías y militares, reyerta sorda, interna, con ciertas ebulliciones, se mantuvo durante los tres periodos políticos sucedidos en la álgida historia contemporánea de Bolivia: el periodo del nacionalismo revolucionario, el periodo de los gobiernos de facto militares y el periodo llamado democrático, de 1982 a la fecha, febrero del 2003. El motín contra el impuestazo de los policías, cuyo epicentro fue el cuartel del Grupo Especial de Seguridad (GES), en las inmediaciones de la Plaza de Armas (Plaza Murillo), terminó por hacer explotar volcánicamente esta sorda reyerta, envidia

común, y hostilidad semisilenciosa y semioculta. El desenlace del conflicto es dramático por el escarnio en los cuerpos de los muertos y heridos, principalmente de policías, aunque también de militares. Los muertos se acercan a la docena, aunque se siguen contando, y los heridos sobrepasan la media centena, no va ser extraño que lleguen a la centena. El odio hizo escena en la Plaza Murillo, escribió su teatro de la crueldad. Los comentaristas, los medios de comunicación y políticos dicen que los acontecimientos desbordaron al débil control del gobierno. Estos hechos se desencadenaron los días 12 y 13 de febrero.

Un descolorido mensaje de un deshecho y atemorizado Gonzalo Sánchez de Lozada—que en inciertas condiciones, todavía es presidente de un gobierno que hizo gala de su ausencia durante los desbordados acontecimientos—, donde se anunciaba la anulación del *impuestazo*, no pudo parar lo que había comenzado como disputa territorial en plena Plaza de Armas; los policías al norte, en las inmediaciones de la Cancillería, los militares al sur, en las inmediaciones del Palacio Quemado y el Parlamento. La disputa territorial continuó con una andada de gases lacrimógenos, y como si esto no fuese suficiente, se armó una verdadera batalla con uso convencional de armas de guerra. Hay pruebas suficientes de que los que comenzaron la matanza fueron los francotiradores, presumiblemente militares, apostados en los campanarios de la catedral y en ventanas de edificios aledaños. También se vieron escenas, transmitidas por la televisión, de paramilitares que usaron revólveres para disparar a quemarropa contra los policías apostados. Hay personas que se preguntan ¿por qué, por qué ésta saña?, ¿por qué se utilizaron francotiradores, cuando se podía evitar el derramamiento de sangre? Estas preguntas son inocentes y de espíritus bondadosos. No se puede olvidar que cuando se acumulan tensiones, odios rumiados durante décadas, cuando se apuestan y disponen estas pasiones a enfrentarse con recursos de guerra, cuando se acumulan y se distribuyen los dispositivos para un enfrentamientos, cuando se juega a la guerra, aunque al principio se pretenda lograr la disuasión, en realidad se han cargado las tintas, se ha preparado el posible escenario de muerte. Cualquier incontrolado evento puede desatar el conflicto que nadie quiera, empero paradójicamente los contendientes quieren en las profundidades de su rencor. ¿Quiénes son los responsables del desenlace?

Trabajemos con la siguiente hipótesis de trabajo: las decisiones no se las toma de la noche a la mañana, sino que aunque estas ocurren en un instante, en verdad han sido preparadas con mucha antelación, en ese ciego trabajo del espesor subjetivo, en los engranajes indecibles de las predisposiciones subjetivas, en el inconsciente de las maquinarias institucionales, y en la acumulada experiencia de frustraciones y resentimientos de la gente—sobre todo tratándose de la penuria de un pueblo sometido a la tortura del hambre y al desaliento corrosivo de la desocupación. Han pasado 18 años de ajustes, shocks, privatizaciones y privaciones, desnacionalización y trasnacionalización inmaculada de la economía nacional. El resultado no se parece en nada a lo prometido: reactivación económica, pleno empleo, solvencia, modernización, participación, democratización. Todo lo contrario, lo que se observa es pauperismo, pobreza extendida, achicamiento impresionante de la economía, dependencia sin dignidad, espirales envolventes de la corrupción, no evidenciadas abiertamente nunca antes, clientelismo y circuito de influencias, descaro del discurso político, que sigue prometiendo lo imposible. Parecen naufragos que se ilusionan ante el espejismo de un acorazado. Constatemos pues que son ajenos al principio de realidad, enajenados del presente, hedonistas defensores de los bienes públicos apropiados indebidamente.

La Paradoja: Todos somos culpables y nadie es culpable. Sobre todo ese nadie que es la nada del gobierno, lo único que atina es enunciar de diferentes maneras una respuesta infantil: "yo no fui, lo juro". Usted, político, ministro, funcionario, presidente, no lo fue, en tanto que todos ustedes no dejan de ser marionetas de maquinaciones internacionales (Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Cooperación Internacional, paranoicos gobiernos estadounidenses), pero también son culpables, completamente, por la inutilidad de su presencia en los engranajes del poder. Todos somos culpables, pues porque antes nadie, salvo los bloqueadores, los marchistas, los guerreros del agua, la coordinadora del agua, no hicimos nada para oponernos al destino impuesto. Nadie se jugó verdaderamente, salvo nuestros héroes recientes, que yacen bajo tierra, contra la trama urdida por una economía desalmada, desplegada como única realidad, cuando en verdad es la fantasía de especialistas sin imaginación. Todos somos culpables, salvo los que votaron por otros, por haber vuelto a elegir a los mismos monstruos de siempre, los sempiternos salvadores de la patria, quienes encuentran la única manera de salvarla entregando el recurso natural de

sus entrañas territoriales para que los gringos la exploten con su tecnología envidiable. Detrás de los muertos, como sombras llorosas o perplejas, estamos todos, por no haber sabido morir como ellos para salvar lo que se llevaban las trasnacionales. La culpabilidad es eso, una forma de compartir irresponsablemente el presente, sin compromiso.

Volviendo a la problemática del motín, debemos preguntarnos por lo menos dos cosas:

1. En qué se diferencia el motín de los policías del 11-12 de febrero del 2003 de los motines militares posteriores a 1964, incluso yendo más lejos podemos discriminar hacia atrás otro periodo de motines y cuartelazos, justamente el relativo al lapso del que hablaba Carlos Montenegro, los correspondientes al álgido periodo de los bárbaros ilustrados. En esta clasificación podemos obviar el golpe del sexenio, posterior a las elecciones de 1951, y hacia atrás, el famoso *corralito* contra Daniel Salamanca, en plena Guerra del Chaco. Entonces cuál es la diferencia entre los motines de la primera República, los relativos a las casi dos décadas de gobiernos de facto, posteriores a 1964, y los recientes amotinamientos policiales.
2. La segunda pregunta tiene que ver con la caracterización del motín policial, su explicación, por lo menos hipotética y la comprensión de la situación política.

En relación a las preguntas vamos a intentar dos hipótesis:

- a) En primer lugar el último motín policial y el anterior de significación política, descontando las huelgas de las mujeres de policías, son motines de policías, valga la tautología, no de militares. Usando la metáfora de Carlos Montenegro, el síntoma del vacío de poder se trastada del ejército a la policía; es decir, el recurso del cuartelazo se transfiere a la institución precauteladota del orden, a la institución que cuida de la ciudad. En segundo lugar, el motín se da lugar bajo el régimen democrático, en pleno ejercicio democrático, no contra la democracia, sino exigiendo dentro de ella derechos, reivindicaciones y manifestando su contrariedad a la

política económica, el impuestazo. Cuando ocurre esto, cuando son las propias instituciones del Estado las que son interpeladas desde adentro democráticamente, cuando el Estado es interpelado por las propias instituciones que resguardan y sustentan su reproducción, haciendo uso democrático de su libre expresión, quiere decir que los aparatos de Estado han entrado a una crisis endógena o han internalizado la crisis en sus propios engranajes. Los límites de la democracia formal comienzan a ser desbordados democráticamente, ya no sólo por el movimiento social, sino incluso por los movimientos internos de las instituciones estatales. Lo que en parte quiere decir que se anuncia que ya no hay Estado, pues sus instituciones han dejado de sostenerlo.

- b. La otra hipótesis pretende una explicación de mayor profundidad, busca una comprensión histórico-social del momento. Cuando los propios aparatos de Estado sufren de una corrosión y fractura internas, cuando la lucha de clases se traslada a estas instituciones, por ejemplo, entre clases y oficiales de alta graduación, cuando el propio orden jerárquico, la organización establecida es cuestionada, es cuando la crisis ha atravesado incluso los engranajes internos del poder. Se puede decir entonces que si no hay aparatos e instituciones que sostengan al Estado ya no hay Estado de Derecho. Mejor dicho, no hay derecho para un Estado de Derecho. Ha quedado anacrónico. Se requiere de la invención social para crear las nuevas condiciones político-sociales-económico-jurídicas para los nuevos escenarios de relacionamientos socioculturales. El poder se ha diseminado. Nada podrá salvarlo, ni los violentos esfuerzos de la metralla, ni la certeza impune de los francotiradores. FIN.

Nota de Edición: Un texto relativo a esta temática titulado "Después del Trauma Nacional, ¿Qué Hacer?" del sociólogo Jorge Lazarte, circuló en "Rumbos". Por su parte el politólogo Sebastián Urioste G. (Instituto de Estudios Políticos de Paris—Sciences-PO/sebasu76@hotmail.com) compartió su texto "Las violencias de febrero", y con el título de ¿Vándalos Mandados? María Galindo (Mujeres Creando, La Paz) emitió su propia lectura de los hechos que interpreta Prada Alcoveza en este ensayo. Los tres textos circularon en la lista electrónica de la Asociación de Estudios Bolivianos. (GD-P.)

Campesinos "sin tierra": el ciclo de la minifundización agraria en Bolivia

✉: Alberto A. Zalles
Departamento de Sociología
Universidad Laval, Quebec.

El autor es candidato a doctor en sociología, Universidad Laval, Quebec. Destacan entre sus artículos publicados : "Educación y movilidad social en la sociedad rural boliviana" (Premiado en el XV certamen de ensayo latinoamericano) Revista Nueva Sociedad, Venezuela, 1999. "El arduo camino de la constitución de la sociedad civil boliviana" (Premiado en el XVI certamen de ensayo latinoamericano) Revista Nueva Sociedad, Venezuela, 2000.

Resumen/Abstract

El artículo analiza, a la luz de los datos demográficos y del empleo producidos en los tres últimos censos nacionales y tomando como caso específico la región colonizadora de Caranavi-Alto Beni, la significación de la emergencia del movimiento social de los campesinos "sin tierra". Asimismo quiere proveer una rápida visión crítica sobre las consecuencias de la demanda, el espíritu de la Ley INRA y las posiciones de los actores/This article analyzes, enlighten by demographic and employment data registered in the last three national census, the meaning of the emergence of the 'sin tierra' peasant social movement. Likewise, it would like to also provide a critical view on demand consequences, the spirit of the INRA law, and the positionalities of social actors.

INTRODUCCIÓN

El 19 de agosto de 2002, medio siglo después de la revolución nacional que restituyó la propiedad agraria a las comunidades campesinas y dotó de tierras individualmente al resto de los campesinos bolivianos, principalmente en la zona andina del país, se inicia el Primer Congreso Nacional de los Campesinos "sin tierra" y vuelve a la escena un problema que se pensaba estaba resuelto definitivamente. Al contrario, ante la carencia y escasez de tierras arables, la actual demanda puede interpretarse también como consecuencia de los contenidos u objetivos que modelaron la política de la Reforma Agraria de 1953 y el curso que siguió el desenvolvimiento de la economía campesina. De otra parte, los factores que amplifican el problema derivan del estado general de la economía agraria nacional, de la evolución seguida por la estructura de las oportunidades profesionales en el medio rural y de la dinámica demográfica misma.

A la reunión campesina de los "sin tierra" se suceden algunas movilizaciones de toma de tierras y la consiguiente reacción violenta del Estado. Es así que, en los primeros días del mes de noviembre de 2002, una acción campesina que intenta posesionarse de tierras en Pananti, provincia Gran Chaco de Tarija, produce un enfrentamiento y la muerte de siete campesinos, quedando heridos otros diecinueve¹. Semanas después, el 29 de noviembre, ante la gravedad de los acontecimientos, los organismos

involucrados en el desarrollo agrario son encaminados por el Senado Nacional hacia la búsqueda de soluciones rápidas y de consenso; para ese efecto se abre un debate denominado "Encuentro por la Tierra". Este evento pone en la mesa de diálogo a los principales actores involucrados en la problemática de la tierra, y naturalmente, el tema de discusión revela diversas cuestiones de fondo, aunque puede decirse que la cuestión aparente, en el cual paradójicamente coinciden los campesinos "sin tierra" y los representantes de grandes propiedades, es la falta de agilidad y operatividad por parte del Estado y las instituciones encargadas de ejecutar el saneamiento de la tierra llevando a efecto lo que dictamina la ley INRA.

Las coincidencias pueden resumirse a través de las expresiones de los principales involucrados. De un lado, Juan Armando Antelo Parada de la Confederación Agropecuaria Nacional, es decir del sector empresarial, dice: "La crisis económica y la pobreza rural generan impaciencia y desesperación. Si a esto le agregamos la lentitud del Instituto Nacional de Reforma Agraria en la ejecución del proceso de saneamiento, tenemos la suma de factores que han roto la paz social en el sector rural (...) lo que el Gobierno debe hacer es darle recursos económicos al INRA para que acelere la ejecución del proceso de saneamiento. De esta manera, después de concluido el saneamiento, el Estado podrá identificar a cabalidad las tierras fiscales que existen, y de una forma ordenada y enmarcada en la ley, proceder a la distribución de tierras". A su turno, Angel Durán del Movimiento Sin Tierra señala: "Ya pasaron cinco años de la Ley INRA y ninguno de los objetivos se ha cumplido".²

Asimismo, la mayoría de los participantes, entre los que se cuentan a instituciones y organizaciones como Academia Nacional de Ciencias, la Cámara Forestal de Bolivia, la Confederación de Ganaderos de Bolivia, la Pastoral Social de la Iglesia Católica, la CSUTCB, representaciones indígenas del CIDOB y de la CONAMAQ y la "Mesa técnica de la tierra" de las ONGs, manifestaban que las soluciones a las reivindicaciones campesinas, ligadas a la carencia de tierra, podrían llegar si también se plantean reformas en las estructuras productivas rurales, y si se estimulan los factores complementarios de la tenencia de la tierra que tiene que ver con el medioambiente, la infraestructura, el capital, la tecnología y el mercado.

En síntesis, la elocuencia factual de los acontecimientos muestra la emergencia de un nuevo actor social que merece, junto al conflicto social del

¹ Periódico "La Razón", 9 noviembre 2002.

² Cfr documentos del "Encuentro por la Tierra", Honorable Congreso Nacional, La Paz, noviembre 2002.

cual está acompañado, y el estado actual de la estructura agraria nacional, un ejercicio crítico de explicación.

¿Quiénes son los campesinos sin tierra?: Consideraciones demográficas, el caso de la región colonizadora del Caranavi-Alto Beni.

De manera simplificada podemos decir que los campesinos “sin tierra” constituyen las nuevas generaciones jóvenes, los hijos de campesinos que llegando a la edad económicamente activa no ha podido encontrar un empleo estable y alternativo al trabajo de la tierra, o que no han podido retomar la explotación familiar de sus padres, porque ésta sufre un crónico fraccionamiento minifundista. Además, para los jóvenes no existe la posibilidad de acceso a nuevas áreas de colonización, pues el Estado no tiene en mira inmediata la habilitación de nuevos espacios para redistribuir y así promover la explotación agrícola por parte de nuevas unidades campesinas. Nosotros anticipamos que una distribución de tierras no solucionará—sino coyunturalmente—el problema de los campesinos “sin tierra”, de los rurales desempleados.

Para mostrar empíricamente el surgimiento de este nuevo actor social y los problemas que plantea al Estado y sus ministerios, responsables de promover el bienestar de la población boliviana, vamos a hacer algunas consideraciones en referencia a la evolución intercensal 1976-1992-2001, focalizando nuestro ejercicio en un espacio rural específico : la región de la colonización campesina de Caranavi-Alto Beni³. Asumimos que, la comparación de los datos censales y el análisis de la relación que se establece entre la dinámica profesional y demográfica nos permitirá poner en claro la estructura profunda del fenómeno que nos interesa explicar. Para ello es necesario reproducir en esta página electrónica dos cuadros demográficos del área que nos concierne.

Cuadro N° 1 Estructura profesional (PEA) en Caranavi-Alto Beni

Actividades profesionales	Censos nacionales		
	1976	1992	2001
Agricultura	12088	30839	34580
Caza y pesca	0	1	11
Minería	594	3859	2187
Industria y manufactura	869	896	1309
Energía	0	21	54
Construcción	172	601	1067
Comercio	578	1125	3332

³ La región colonizadora de Caranavi-Alto Beni comprende el conjunto de la provincia de Caranavi; la 4ta sección, Palos Blancos, y la 5ta sección, La Asunta, de la provincia Sud Yungas; la 2da Sección, Guanay de la provincia Larecaja. Es importante señalar que la provincia Caranavi es una de las más jóvenes provincias del departamento de La Paz, creada en 1989, a partir de la antigua Provincia Nor Yungas y en virtud a crecimiento demográfico asociado al desarrollo de la colonización.

Hotelería y restauración	0	190	1277
Transporte	242	685	872
Finanzas (intermediación financiera)	0	9	44
Empresa (serv; empresariales)	76	172	143
Administración pública	105	186	322
Educación	484	961	1533
Salud (pública, serv. privado)	0	143	267
Servicios sociales (comunicación)	0	1193	436
Servicios personales (trabj. doméstico)	816	327	507
Seguridad (policía, ejército)	0	12	2481
Sin especificación	372	4871	14536
Busca trabajo por primera vez	44	235	0
Total	16440	46326	64958

Fuente: INE, Bolivia.

En el Cuadro N° 1 podemos destacar las siguientes observaciones: **Primero**, en el periodo 1992-2001, los agricultores aumentan en un número de 3741 individuos, es decir el volumen de esta categoría profesional se mantiene casi estático si consideramos el dato del censo de 1976, momento en el cual el proyecto de colonización estaba en auge. Como agricultor debe entenderse a aquella persona que tiene en propiedad un lote colonizador.

Segundo, contrariamente a la categoría de los agricultores, el grupo designado por el INE como los "sin especificación" aumenta de manera considerable, en el último censo reúne una cifra de 14536 personas. Para nosotros, es dentro esta categoría donde se ocultan los campesinos sin tierra. En los hechos los "sin especificación" son personas de origen campesino que eventualmente trabajan como jornaleros agrícolas y son ocupados por los colonizadores, especialmente en los periodos de la cosecha del arroz y sobre todo en la recolección y el tratamiento del cacao. Esos jornaleros son también una mano de obra itinerante que eventualmente se mueve hacia las minas de Tipuani y puede también dirigirse a la cosecha del café, en las provincias propiamente yungueñas. Diversos estudios sociológicos han hecho mención a estos trabajadores y a la fuente de empleo que ofrece la colonización⁴.

Nosotros dejamos de lado un comentario sobre la evolución de las otras profesiones, pues vemos que en términos generales ellas tienen una limitada capacidad para absorber a la población económicamente activa. Hace excepción el comercio, actividad cuya estratificación interna no se expresa en las encuestas censales; en esta actividad laboral están incorporadas un gran número de personas que realizan pequeñas actividades comerciales para conseguir un ingreso de subsistencia y, al parecer, para no perder su

⁴ Ver por ejemplo : Centro de Estudios y Proyectos, *Apuntes sobre la colonización*, CEP, La Paz, 1981. p. 88. COTESU-OSCAR, *Evolución de uso de la tierra en el Area 4 del Alto Beni*, Cotesu, La Paz, 1992, p. 43.

integración socio-económica dentro un sistema caracterizado por su precariedad laboral⁵.

Tercero, para complementar nuestra argumentación, proponemos el cuadro N° 2 donde se podrá ver la evolución demográfica de los dos últimos censos. En ese cuadro nos detendremos a interpretar la significación que tiene, para la realidad laboral, el segmento comprendido entre los 10 a los 19 años de edad. Ese segmento en 1992 constituía un número de 18833 personas, lo que quiere decir que en los diez años siguientes ellas entraron efectivamente al mundo laboral, o en todo caso son sujetos que demandan fuentes de trabajo a la sociedad. En nuestra interpretación es ese segmento que ha inflado la categoría de los "sin especificación", mostrado en el cuadro de la estructura profesional. Ahora bien, si retomamos ese mismo segmento de edad en el censo de 2001 y lo proyectamos dentro de diez años, veremos que, en ese próximo lapso de tiempo tendremos en la región 25405 personas que exigirán un empleo, o un nuevo lote de tierra, para procurarse ganar la vida. El cuadro número 2 que a continuación incluimos es de características demográficas, y cubre los datos ofrecidos por los censos nacionales de 1992 y el año 2001.

Cuadro N° 2 Población Caranavi-Alto Beni según edades

Distribución por Edades	Censos nacionales	
	1992	2001
0-9	28977	33416
10-19	18776	25405
20-29	18833	18249
30-39	11894	14732
40-49	7898	10284
50-59	4191	6331
60-69	2655	3646
70-79	1482	1710
80-89	547	368
90-99	0	87
Total	95253	114225

Fuente: INE, Bolivia.

Como se percibirá, el tema de los campesinos "sin tierra" es un problema demográfico y sobretodo tiene que ver con el estancamiento rural y con el conjunto de las estructuras económicas del país. En ese sentido, mientras Bolivia continúe considerándose un país en el subdesarrollo (o en via de desarrollo) y la solución de las demandas de este nuevo actor se realicen a través de la simple distribución de pequeñas propiedades individuales, debilmente capitalizadas, la presencia de los campesinos "sin tierra" se convertirá en un acontecimiento cíclico que tomará el siguiente esquema: distribución de tierras > minifundización > nueva presión campesina >

⁵ Virgine Baby-Collin describe bien el sentido integrador que tiene el comercio , especialmente para las mujeres, ver : "Des usages de l'indianité à La Paz: formes de métissage dans la Ville"

distribución de tierras. En ese trayecto cerrado la aspiración campesina se convierte únicamente en un proyecto de perpetuación de la pobreza.

Ahora bien, si la eventual reproducción del ciclo tiende a conservar un status quo, en lo que se refiere a la esfera del desenvolvimiento económico, es importante subrayar que no ocurre lo mismo en la dimensión del desarrollo del factor humano, el cual progresa independientemente, y por lo tanto, marca particularmente el sentido de los nuevos acontecimientos societales. Dicho de otra manera, el ciclo económico de la asignación del recurso tierra puede repetirse. Sin embargo, eso no significa que los actores reproduzcan las mismas conductas. Teniendo en cuenta esa situación es plausible suponer que en un periodo de 50 años, tiempo que nos separa de la Reforma Agraria Boliviana, la realidad social presenta mutaciones significativas y los nuevos campesinos "sin tierra", la población rural, demuestra una nueva cultura política, nuevos estilos de vida y produce nuevas formas de adaptación a la realidad social. Las causas y expresiones del cambio son culturales y políticas. Así, por ejemplo, mencionemos la variación que en el tiempo ha sufrido la tasa de analfabetismo a nivel nacional, en 1976 correspondía a un 37 % y en 2001, año del último censo, toca a un 12,93 % de la población. La creciente universalización de la enseñanza primaria en la zona rural del país se inscribe, también, entre los factores que influyen fuertemente en la modificación de las conductas sociales.

De otra parte, la estructura misma de la familia campesina ha cambiado, porque ésta ha adquirido un nuevo perfil en su composición cuantitativa y, sobretodo, en sus relaciones internas y mentalidades; entre paréntesis, digamos que ese puede constituir un tema especial de reflexión⁶. Asimismo, a estos hechos se añade la emergencia de una élite política de origen campesino que hoy tiene una indiscutible plaza en la vida pública nacional y que, sin duda, influye sobre la organización de los campesinos "sin tierra". En resumen, ese conjunto de elementos permite afirmar que el perfil del actual campesinado "sin tierra" corresponde a un actor social dinámico, a una masa crítica que rápidamente ganó espacio de interpelación no sólo para enarbolar una reivindicación específica sino para tomar parte en la toma de decisiones concernientes a las políticas agrarias del país⁷.

Problèmes d'Amérique Latine, No 48, Paris, 2003, p. 78.

⁶ El censo de 2001 muestra que en la región colonizadora del Caranavi-Alto Beni el tamaño de la familia se ha reducido a un promedio de 3.78 miembros por cada una de ellas.

⁷ Los cambios demográficos, el acceso a la lectura, las influencias de redes de comunicación cada vez más extensas, sin duda, son factores que afectan las aspiraciones de las masas y el comportamiento de sus dirigentes. Una base teórica, al respecto, puede encontrarse en Emmanuel Todd, *L'invention de l'Europe*, Editions du Seuil, Paris, 1996.

Del debate Inconcluso de la Reforma Agraria de 1953 a la Improvisación neoliberal de la Ley INRA.

Mariano Baptista G., en su *Historia Contemporánea de Bolivia* resume claramente el debate que se produjo en relación a la estrategia que debía seguir la reforma agraria. Según el historiador hubieron diferentes visiones que en última instancia se redujeron a dos posiciones : la que proponía una "Revolución agraria, mediante la nacionalización de al tierra y el cultivo colectivo de las haciendas, y la que sostenía la Reforma Agraria con el reparto de los latifundios en pequeñas propiedades campesinas, que fue el criterio que se impuso"⁸. Añadir que el camino seguido fue asumido ante la acción del movimiento campesino impulsada por la eclosión social producida por la propia revolución del 52.

Ahora bien, los resultados de la estrategia que sigue la reforma han sido tratados ampliamente y, en general, todas las evaluaciones coinciden en que, desde el punto de vista puramente económico, la reforma engendró el minifundio y contribuyó al empobrecimiento rural⁹. Además, después de la reforma Agraria de 1953 se hizo poco para modificar las estructuras agrarias. Solamente en 1996 a través del Ley N° 1715, más conocido como la Ley INRA, el Estado Boliviano pudo redefinir las políticas agrarias nacionales y completar de ese modo su plan de reajuste iniciado en 1985.

Sin embargo, el problema mayor de la ley INRA es su defectuoso esqueleto neoliberal que, en realidad, constituye un reglamento jurídico centrado sobre la cuestión de la propiedad. Las críticas que se han hecho a la Ley insisten en que ésta justifica la libre venta de la tierra y allí se cree encontrar su espíritu liberal; sin embargo, la compra y venta de la tierra fue más o menos generalizada en Bolivia luego de 1874 y la Reforma Agraria de 1953 no introdujo ninguna restricción, salvo aquellas disposiciones que protegen las propiedades de las comunidades. Lo que nosotros podemos decir es que la improvisación neoliberal de la ley INRA debe deducirse del hecho que sus contenidos en momento alguno hacen mención de la intervención del Estado a favor del desarrollo agrícola. Es decir, se pone fuera de lugar el rol que debería cumplir el Estado para organizar la capacidad productiva campesina y empresarial (sea de unidades productivas individuales o colectivas), para fomentar el crédito, para incentivar la innovación productiva, para proteger la agricultura nacional, o para buscar formas de conexión con el mercado

⁸ Mariano Baptista Gumucio: *Historia Contemporánea de Bolivia*. Gisbert, La Paz, 1978. p 579.

⁹ Una evaluación específica de la reforma Agraria es la de Xavier Albó : *¿Bodas de oro o requiem para la Reforma Agraria?* Cipca, La Paz, 1978. Para tener una vision actualizada del desarrollo agrario ver: Jorge Albarracín : "El estancamiento de las economías campesinas y empresarias en Bolivia", *Nueva Sociedad*, No 174, Venezuela, 2001, pp 132-144.

internacional. La Ley INRA redonda en los conceptos de *la distribución, reagrupación y redistribución de la tierra* y enfatiza en la penalización del mal uso del recurso tierra.

Para comprender mejor la ruptura que se hace con el proteccionismo en materia agraria recordemos que, en correspondencia al paradigma de desarrollo en boga durante la época de la revolución de abril de 1952, orientado a la sustitución de importaciones, el Estado junto con la Reforma Agraria crearon instituciones de intervención y promoción como la Corporación Boliviana de Fomento, el Banco Agrícola de Bolivia ó el Instituto Boliviano de Tecnología Agrícola. En la ley INRA el Estado se limita a establecer la regulación de la propiedad de la tierra y evade sus responsabilidades en el fomento del desarrollo agrícola, aunque hay que admitir que la innovación de la Ley es su *aggiornamento* ecologista, pues el Estado se muestra protector de los recursos, y extrañamente asocia el desarrollo agrícola al ecoturismo.

Como se percibirá, en el fondo el conflicto suscitado por los campesinos “sin tierra” no contradice la ley INRA, ya que el Estado, en todo caso, luego de un periodo de saneamiento, podrá disponer lotes agrícolas para los “sin tierra”, lo cual, sin embargo, no significará actuar contra la pobreza campesina y prevenir así la repetición de un escenario de conflictos en las próximas décadas, como mostramos en el suscito análisis que hicimos a cerca de las tendencias socio-demográficas que sigue una zona rural específica : el Caranavi-Alto Beni.

A manera de conclusiones

La idea de redistribuir la tierra es una idea noble, moralmente correcta; sin embargo constituye una solución de sentido común y voluntarista a la cual se adscriben las entidades políticas, los dirigentes sindicales y especialmente los técnicos de las ONGs. Finalmente redistribuir la tierra es una solución fácil, carente de una seria reflexión. Distribuir la tierra sin tener en claro una estrategia de desarrollo—y hay que admitir que la sociedad boliviana no ha producido una estrategia de desarrollo—es sentar las bases para reproducir el mismo escenario que vivimos hoy y el que podríamos vivir de aquí a veinte, ó cincuenta años. En términos simples, igual o quizás más perentorio que distribuir la tierra urge la definición de un proyecto para organizar la economía campesina. Es decir, definir los modelos productivos factibles al desarrollo agrario: Desarrollar la capacidad productiva campesina a tres niveles 1) La Creación de un sistema de crédito y capitalización del pequeño propietario individual. 2) Estímulo a las asociaciones de productores campesinos del tipo de ANAPQUI (productores de quinua, *Chenopodium Quinoa*) o de las cooperativas tipo el CEIBO (productores de cacao, *Theobroma Cacao*). 3)

Definir la vocación agrícola campesina proyectándola, en forma competitiva, al mercado internacional, e industrializando la producción tradicional.

Lamentablemente parecería que el espíritu tecnócrata y pseudo-liberal concibe como proyectos fuera del tiempo, y pasados de moda, a los programas que abogan por la organización de la fuerza de trabajo de los "sin tierra" en sistemas asociativos o cooperativos, en unidades económicas colectivas. De otro lado, los prejuicios ideológicos de las élites sindicales y de sus asesores frustran las esperanzas de capitalización del pequeño productor individual, del campesino innovador. FIN

Bibliografía

- Albarracín, Jorge
2001 "El estancamiento de las economías campesinas y empresarias en Bolivia", Nueva Sociedad, No 174, Venezuela, pp 132-144.
- Albó, Xavier
1978 ¿Bodas de oro o requiem para la Reforma Agraria? Cipca, La Paz, 1978.
- Assies, Willem
2003 "David versus Goliath in Cochabamba: Water Rights, Neoliberalism, and The Revival of Social Protets in Bolivia", Latin American Perspectives, Vol. 30, No 3, 2: pp 14-36.
- Baby-Collin, Virgine
2003 "Des usages de l'indianité à La Paz: formes de métissage dans la Ville" Problèmes d'Amérique Latine, No 48, Paris, p. 78.
- Baptista Gumucio, Mariano
1978 Historia Contemporánea de Bolivia. Gisbert, La Paz. p 579.
Centro de Estudios y Proyectos
- 1981 Apuntes sobre la colonización, CEP, La Paz. p. 88.
Cortes, Geneviève
- 2002 "Migrations et mobilités circulatoires dans les Andes boliviennes: La face cachée d'une ruralité "en résistance", Caravelle, No 79, Toulouse. pp 93-115.
COTESU-OSCAR
- 1992 Evolución de uso de la tierra en el Area 4 del Alto Beni, Cotesu, La Paz. p. 43.
- Honorable Congreso Nacional
1996 Ley No 1715 (INRA), La Paz. <www.congreso.bo.gov>
Honorable Congreso Nacional
- 2002 "Encuentro por la Tierra", La Paz, noviembre. <www.congreso.bo.gov>


- Instituto Nacional de Estadísticas
2001 Censos nacionales 1976,1992, copias digitales.
Portes, Alejandro y Hoffman, Kelly
2003 "Latin American Class Structure: Their Composition and Change during the Neoliberal Era". Latin American Research Review, Vol. 38, No 1. pp 41-82.
Todd, Emmanuel
1996 L'invention de l'Europe, Editions du Seuil, Paris.

NARRATIVA DE HISTORIA

Cincuenta Años Después: El 3 de Agosto de 1953 en una carta Informativa.

"Nuestro país es muy raro. Hacemos correr ríos de sangre, y sin embargo nos horrorizamos con un accidente automovilístico. Por una parte propiciamos revoluciones casi por costumbre, y por otra parte, nos declaramos fanáticos defensores de la Constitución".
Jaime Saenz

"La desventura de hoy no es más real que la dicha pretérita".
Borges

 Guillermo Delgado P.
Departamento de Estudios Latinoamericanos
Universidad de California Santa Cruz

El autor es antropólogo, funge de Editor de la Revista E del Bolivian Research Review. Con John M. Schechter acaba de compilar el texto trilingüe: Quechua Verbal Artistry: The Inscription of Andean Voices. Arte expresivo Quechua. La inscripción de voces Andinas, de próxima aparición en la colección Bonner Amerikanistische Studien, de la Universität Bonn.

Resumen/Abstract

El artículo responde a la pregunta ¿cómo la historia deviene historia? El texto analiza, deconstruyéndola, una carta informativa emitida el 3 de Agosto de 1953. Es un comentario a lo cotidiano, y a la reproducción mecánica de la información después de cincuenta años y a propósito de una ley que se llamó en algún momento de la reforma agraria. The article answers the question "How history becomes history? The text, deconstructing, analyzes a newsletter issued on August 3, 1953. It is a commentary on daily life, about the mechanical reproduction of information, fifty years ago, and a law called then agrarian reform.

Nota Introductoria

Estudiosos y estudiosas de las revoluciones sociales concuerdan que en América Latina se registran cuatro de estos eventos radicales (de raíz) a lo largo del siglo XX: la Revolución Mexicana (1910-1917), la Revolución Boliviana (1952), la Revolución Cubana (1959), y la Revolución Sandinista (1979). Entre otras, hay una trunca y que también se la conoce por Revolución Guatemalteca (1954). Queda otra, a manera de epílogo, también de significativas proporciones: la rebelión zapatista de Chiapas (México) que explota el primero de enero de 1994. La histórica, primeriza y no-anglo-sajona, es la Revolución Haitiana (1791)—considerada la primera revolución americana— porque fue hecha en una isla francofona de densa población afro-antillana, inspirada por los eventos de la Revolución Francesa y la colaboración de algunos antimonárquicos españoles. A esta última Alejo Carpentier, el ilustre escritor caribeño, la alude con evocativa precisión en su El siglo de las Luces (1963). Varias cotidianidades enriquecen los eventos de ese texto.

La frase, "la historia se hace desde la cotidianidad" nos la recordó recientemente Hugo Zemelman (2000). El propósito de esta breve nota es ofrecer una re-lectura de la narración de acontecimientos a través del hallazgo de un texto relativamente importante para deconstruir la historia de un día de la revolución social boliviana acaecida en 1952. Esta lectura de un día tiene que ver con aquello que Carlos Monsiváis escribió en 1980 cuando dijo que: "Todo sentido histórico languidece cuando ya casi ningún protagonista del pasado es entendido genuinamente como nuestro contemporáneo". (1980: 172)

Los hechos del documento aludido proceden de una página mimeografiada en el que baso estas notas, y que cubren circunstancias relativas al segundo año del gobierno revolucionario. Está contextualizado en el año 1953. Aparentemente la circulación de una "*Carta Informativa*" emitida por la Subsecretaría de prensa, informaciones y cultura del gobierno de la época, era la manera de hacer llegar resúmenes de noticias a un público selecto de interesados, entre éstos: embajadas, políticos locales, líderes sindicales, militantes y, naturalmente, periodistas y escritores oficiosos y oficiales. Para mejor identificar el breve texto decidí citarlo en cursivas.

Nota Uno

Esta página que tengo en las manos, ya raída por el tiempo, procede de un hallazgo fortuito porque ya han transcurrido cincuenta años, y encontrar un papel después de ese tiempo, merece llamarse un hallazgo. La verdad es que recogí esta página en la biblioteca de mi ya finado padre quien ocupara—allá lejos y hace tiempo—un curul en el parlamento boliviano y la Convención Nacional de 1938. Aparentemente, por esas coincidencias o caprichos de la historia, asistieron a la misma Convención Nacional y en la misma calidad de parlamentarios: Víctor Paz Estenssoro (diputado por Tarija), Walter Guevara Arze (diputado por Arani), Carlos Medinaceli (diputado por La Paz), Augusto Céspedes (diputado por Cochabamba) y Augusto Guzmán, entre varios otros.¹

El membrete superior de esta hallada página identifica su procedencia: "Subsecretaría de Prensa, Informaciones y Cultura. Palacio de Gobierno. La Paz, Bolivia". Es una página mimeografiada sobre papel "sábana", como se conoce a

¹ Algunos apuntes respecto a este histórico evento que el historiador Herbert Klein (1968: 319) llamó "El Constitucionalismo Social" han sido recogidos en el libro de Trifonio Delgado Gonzáles, *Cien Años de Lucha Obrera en Bolivia* (La Paz: ISLA, 1984, especialmente las páginas, 124-134). En 1992, el historiador Ferrán Gallego publicó un capítulo de esta historia con bastante precisión y crítica. Ver, específicamente el capítulo II titulado "La Convención Nacional de 1938", en su obra, *Ejército, Nacionalismo y Reformismo*

ese áspero papel también utilizado en los periódicos de la época. El *tipo Courier* es de punto 10; con toda seguridad procedente de una máquina Underwood o una Olympia, y está firmada por un rasgo casi lineal que va de izquierda a derecha, con una breve elevación en el medio. Es la firma del Jefe del Servicio Exterior a quien no pude identificar; en la línea inferior están unas iniciales, se presume (lo contrario no sucedía en esos tiempos) de una dactilógrafa: "mba,". Es una "*Carta Informativa*" emitida en La Paz, el 3 de Agosto de 1953.

Nota Dos

En aquellos tiempos los primeros mimeógrafos (el término no se lo encuentra en los diccionarios de la lengua española por ser un anglicismo, aparentemente sólo recientemente admitido) se consideraron—estoy seguro—una tecnología de avanzada reproducción de la información. Se podía calar el texto mecanografiado sobre un molde o "stencil", papel ligeramente húmedo que resistía las perforaciones de los tipos de una máquina de escribir y que permitía al menos la reproducción de unas 200 páginas sino más. La máquina llevaba la marca "Gestner" (posiblemente alemana), y precisaba de un tubo de tinta que se aplicaba al rodillo que contenía el "stencil". Una manija con bola permitía girar una elemental polea ligada a los rodillos que distribuía la tinta en forma uniforme a través de una cara del "stencil" y la prensa portátil comenzaba a emitir los textos impresos. Tanto el "stencil" como las variedades de mimeógrafos se especializaron tanto que se podía reproducir varios miles sin mayor problema. La aparición de la fotocopidora "Xerox" en los años 1970, declaró el mimeógrafo obsoleto. Esta tecnología es tan percedera que las gigantescas Apple 1 e IBM ya están almacenadas en el museo de la computadora.

El texto que comento tiene ocho párrafos breves y comienza con una nota personal: "*Estimado amigo:*" No dice "amiga". Luego procede a informar y dice: "*La semana que finalizó [es decir la última del mes de julio de 1953] ha estado dedicada en Bolivia a la promulgación del Decreto de la Reforma Agraria cuya copia le adjuntamos.*" Como obtuviera la página aislada sin la promulgación del Decreto aquí me refiero solamente al contenido de la carta. Se asume, después de tanto tiempo, que ya Xavier Albó cantó un requiem a ese hecho en su conocida obra: *¿Bodas de plata?: o, Requiem por una Reforma Agraria*. (La Paz: 1979). El sociólogo Alberto Zalles nos ofrece una mirada reciente a las

en América Latina. La Gestión de Germán Busch en Bolivia. (Barcelona, Promociones y Publicaciones Universitarias, 1992, 31-101).

consecuencias de este fenómeno en su texto *"Campesinos sin tierra": el ciclo de la minifundización agraria en Bolivia* (2003) publicado en este mismo volumen.

Nota Tres

Luego, en el párrafo inmediato sigue un texto interesante, dice: *"El mencionado Decreto que transformará la estructura económica de Bolivia liquidando al feudalismo existente desde el coloniaje y que ha conmovido a las masas campesinas al sumarse a la vida nacional, fué [sic] firmado en la localidad de Ucureña por el Gabinete en Pleno [sic]. En dicho lugar se efectuó una concentración de 300.000 campesinos y ante ellos habló el Presidente de la República Dr. Víctor Paz Estenssoro y el señor Ministro de Asuntos Campesinos, Dr. Ñuflo Chávez Ortíz. La Comitiva Presidencial después de la firma del Decreto se trasladó por vía aérea a La Paz, donde en el Estadio [de Miraflores] se reunió una multitud de Mineros, Ferroviarios y Campesinos a la cual dirigieron la palabra el Presidente y el ministro de Asuntos Campesinos".* Se entenderá que el texto de Albó se refiere más a lo anticuado de la reforma que en un momento dejó de tener sentido. De ahí el título de su libro que tiene relación intertextual con uno previo escrito por Sergio Almaráz Paz y que titula *Requiem para una República*. Sin embargo, para reconocer la profundidad transformadora de la revolución nacional del 52, no deberíamos subestimar el gran hecho que constituyó la eliminación del atroz sistema del pongueaje, la hacienda, y el latifundio ineficiente. Es interesante que, a cincuenta años, veamos, casi con sorpresa, el agazapado regreso de ciertas formas que las pensamos inevitablemente desechadas, me refiero al peonaje endeudado y a esporádicas formas de esclavismo. Retorna con ello esa gran pregunta: ¿se repite la historia? ¿Como drama? ¿Como comedia? Esta pregunta tiene referencia a un texto escrito por James Kohl (1977) que logró escribir sobre Antonio Mamani Alvarez, un líder campesino-indígena que agitó anticipándose a los hechos del 52. El texto de Kohl sirvió de inspiración para éste que ofrezco.

Nota Cuatro

El tercer párrafo resume brevemente el anterior y dice: *"Con la Firma del Decreto, el Movimiento Nacionalista Revolucionario cumple uno de los postulados de la Revolución Nacional completando la Nacionalización de las Minas y el Voto Universal."* Ciertamente, la firma del decreto, de acuerdo a esta carta informativa, no es sino el registro de intención, de un programa que se llevaba a cabo en el trasfondo de una sociedad que había experimentado una revolución social. Se sabe que este decreto anuló la práctica del

"pongueaje"—terrible gratuita forma de extraer lo máximo de la fuerza de trabajo indígena y rural. El estilo del texto ya desprende una especie de burocratización de la empresa revolucionaria, y el estilo retórico de sus líderes en contacto diario con "las masas", confirma la construcción de un clima eufórico y al mismo tiempo pragmático de las cosas. La técnica de la comunicación directa y el compartir de la ejecución de las promesas revolucionarias se inscribe al calor de los actos masivos. El anunciar la realización de las metas fijadas (en un contexto celebratorio) también tiene el propósito de recordar el listado de tareas por llevar a cabo. Los actos masivos hacen referencia inmediata a los más recientes hechos tales como la nacionalización y la concesión del derecho al voto universal. El uso de mayúsculas para nombrar los hechos (Decreto, Voto, Gabinete en Pleno, Jefe, Firma del Decreto, etc.) subraya la coherencia del programa del "Partido", también con mayúscula. Todo parece medido, como la puesta en escena de un acto fílmico.

Nota Cinco

El párrafo que sigue es aún más revelador, pues: *"El jueves 30 del pasado mes de Julio [1953], la oficialidad de las Fuerzas Armadas en número de 300 prestó juramento ante el Presidente, Jefe del Movimiento Nacionalista Revolucionario, incorporándose al Partido y dando con este acto prueba de la nueva mentalidad revolucionaria del Ejército en defensa del pueblo"*. Este antecedente es importante de subrayar porque declara la abierta politización del ejército. Es interesante, y extraño, que no se mencionara que la revolución derrota al previo ejército cuya misión, por implicación, fue la de servir a los núcleos oligarcas (los Barones del Estaño) y, por extrapolación, la de masacrar al pueblo. Por esta razón se hace alusión a "la nueva mentalidad revolucionaria del ejército" que "presta juramento" ante el Presidente y Jefe. El "juramento" es una práctica cultural demasiado próxima a las prácticas religiosas que implican la lealtad. Se sabe por ejemplo que los revolucionarios juraban ante las sacralizadas fotografías de Paz Estenssoro y Siles Zuazo. En cuanto a "la nueva mentalidad revolucionaria" la referencia retórica tiene que ver más con la re-estructuración de la institución y el vacío que dejara la derrota de Alemania durante la Segunda Guerra Mundial y su indirecta influencia sobre instructores del ejército derrotado en la breve contienda del 52. No por nada, los cascos alemanes aún se utilizaban hasta fines de los años cincuenta, como atestigüan fotografías de la época. Pues estaba a las puertas, la nueva aproximación del gigante del norte y su influencia geopolítica sobre la nación (y por ende, la adopción de otro tipo de casco de la

soldadesca). Es difícil dar sentido a la noción de "la nueva mentalidad". En definitiva no aparenta ser una transformación epistémica, sino un reacomodo del ejército ante la misión de reorganizar el Estado-nación. Aquí también se permite entender que la Revolución Nacional ya tenía el fiat de los Estados Unidos, y hasta es posible presumir que la re-estructuración del ejército nacional se hubiera considerado una respuesta—sobretudo por parte de los Estados Unidos—a la persistencia de las milicias revolucionarias vistas como un ejército popular e irregular (los famosos 'milicianos') que había que eliminar o desautorizar, especialmente después de la revolución del 52.

Las milicias por otro lado, habrían sido una especie de recordatorio del poder revolucionario del pueblo en momentos en que el poder del MNR, en su primera fase, necesitaba del punto de referencia leninista 'el poder nace del fusil' mientras demostraba estar en control de toda la situación.²

Luego, entre abril de 1952 y enero de 1953, habían sido descalificados entre cien y doscientos cincuenta oficiales del Colegio Militar (Brill 1967: 16) por haber sido leales a la junta previa (Ovidio Quiroga, comandante del ejército nombra presidente de la junta a Hugo Ballivián, un general, aunque otro, Humberto Tórrez Ortíz, quiere también la misma presidencia. Esta junta es la que, después de cuatro meses es derrocada). Finalizada esa etapa, los milicianos y barzolas desaparecerían poco a poco y dejarían de tener sentido después del 4 de noviembre de 1964, la fecha del Coup de Barrientos contra el MNR.³ Barrientos representaría la distorsión de aquella "nueva mentalidad" que el documento alude en 1953. En fin, de acuerdo a esta precisión histórica, se necesitaron apenas once años para ejecutar la regresión de la revolución nacional. Si es cierto que las revoluciones transforman las sociedades, ellas también recrean nuevas formas de la desigualdad. Los regímenes posteriores expresarían este giro ad nauseam.

Nota Sels

La secuencia lógica de esta sentencia la tenemos gráficamente representado en el párrafo que sigue: "Por Decreto se ha creado el Colegio

² Revisar, entre los textos históricos con las sensibilidades postcoloniales que definen la producción académica del nuevo siglo veintuno, el poco conocido artículo de René Zavaleta Mercado, "El proletariado minero en Bolivia entre 1940 y 1980". Boletín de Estudios Latinoamericanos y del Caribe. Vol 32: 29-38 (Amsterdam), 1982.

³ Ver el artículo de Gloria Ardaya Salinas, Las Barzolas y el Comité de Amas de Casa. La Paz : Centro de Investigación y Consultoría/Serie Estudios Sociales, 1983. Ver también un artículo de la misma autora, con un comentario de Rosario León, titulado "Mujeres: ¿Hay Democracia para Ellas? EN Juan Enrique Vega et al. Bolivia: Democracia y Participación Popular. La Paz: FLACSO/Camarlinghi, 1985, 153-170.

Militar *"Gualberto Villarroel"* donde tendrán cabida los hijos de la clases media, obreros y campesinos para formar la nueva oficialidad del Ejército Revolucionario que sustituye al podrido ejército oligárquico." Si asociamos el párrafo anterior que hace alusión a "la nueva mentalidad revolucionaria del ejército" y lo cotejamos contra éste, se notará que existe una especie de vacío semántico en esa frase. De hecho, once años después, en 1964, se asume entonces que "la nueva oficialidad del ejército revolucionario" es el que conduce la contrarrevolución. De acuerdo a la referencia que utilizamos habrían sido: *"los hijos de las clases media, obreros y campesinos."* Sin embargo, es más posible suponer que dichos sujetos provenían de la reducida clase media, o la 'media clase'—como afirmara Zavaleta Mercado alguna vez. En un país donde el racismo es mediador de las relaciones humanas (como en África del Sur, Brasil, Estados Unidos, ó Guatemala), es casi imposible imaginar que las "clases obreras y campesinas" hubieran accedido a las posiciones de autoridad de aquel nuevo ejército revolucionario. Mesa Gisbert, en un artículo diacrónico y evaluativo de la historia nacional, escribió en 1993 una referencia a este preciso momento: "Banzer era, como lo fue Barrientos, una prolongación orgánica de la Revolución Nacional en su versión militar y cada vez más conservadora, representante de una nueva clase surgida de 1952, entonces ya muy poderosa". (1993: 324). Lo que está claro es que las procedencias de ambos militares mal se pueden encontrar en lo puerilmente augurado en la carta informativa. No fueron ni campesinos, ni obreros. Algunos teóricos que estudian las revoluciones han afirmado que las revoluciones son modernizadoras; otros afirman que las revoluciones han sido en su mayoría agrario-campesinas (con la excepción rusa de 1917 que fue una revolución proletaria), y otros aún afirman que son formadores de una clase media consumerista. En el caso boliviano, para 1964, año de la derrota del MNR, se habría creado una clase media y una burocracia ineficiente, el país se habría modernizado (aunque sabemos que el concepto no es sincrónico, es desigual, demasiado centralizado en la industrialización, y siempre parcial), y la reforma de la tenencia de la tierra se habría descarrilado tempranamente. El ejército revolucionario se habría transformado en otra cosa, ya no oligárquico sino ligeramente corporativista—y con Barrientos, prebendalista—, en el sentido de sus ramificaciones económicas y dependentismo semicolonial, su demasiada proximidad al control del Southern Command (La Escuela de las Américas) del ejército imperialista, en ese entonces en la Zona del Canal de Panamá, desdice

casi en forma absoluta su primaria inclinación a haber sido siquiera elementalmente 'revolucionario', salvo como un fonema efímero.

Nota Siete

El texto que sigue asimila la psico-información. Dice: "*Personas desplazadas de las filas del Partido de Gobierno é [sic] interesadas en desprestigiar los postulados de la Revolución Nacional, hicieron circular falsos rumores en sentido de que la moneda boliviana sufriría una nueva devaluación, los personeros del Supremo Gobierno desmienten categóricamente esta falsa aseveración*". Éstos son los momentos en que se crearon los vocablos "cupo" y "cuperos". Ambos fueron términos para referirse a la distribución controlada de alimentos—creada por la escasez y por ende, también a su contrabando y su acaparamiento con propósitos de lucro. El término "mercado negro" se habría popularizado entonces. Largas filas de compradores de la canasta familiar—registrados en los diarios de la época—no fueron sino ejemplos de los días duros que se aproximarían. El inicio de las grandes migraciones rurales a las mal diseñadas ciudades bolivianas coincidiría con la realización parcial de una reforma agraria, una vez más, desestructurante de antiguos sistemas heredados desde la colonia, amén de la destrucción final de varios latifundios y sistemas *áyllucos* y del servicio gratuito de mano de obra ejecutados a través de sistemas tales como el pongueaje, el peonaje de deuda circular, el despojo de tierras de comunidad, la transmisión de la deuda y el servicio gratuito heredado—una especie de virtual esclavitud—que se transmitía como si fuera una herencia de padres a hijos⁴. A ese momento se puede asignar el origen de la reconstrucción de grandes circuitos de mercaderes indígenas que, con propiedad, reconstituyeron las vías de intercambio comercial, y por ende, subvirtieron el monopolio de hacendados y patrones ausentes.

Nota Ocho

Prosigue la Carta Informativa: "*En ceremonia especial realizada el jueves 30 del mes de julio, Cadetes de la Primera Institución Policiaria de Bolivia, ingresaron a las filas del Movimiento Nacionalista Revolucionario, previo juramente de lealtad*". Naturalmente, en el proceso de la organización del Estado-nación en vez de institucionalizar los servicios regulatorios y burocráticos para justificar una continuidad eficiente de su servicio, en este caso, se politiza

⁴ Silvia Rivera Cusicanqui recoge el contexto de este periodo en "Oprimidos pero no Vencidos, Luchas del Campesinado Aymara y Quechwa de Bolivia, 1900-1980". (Ginebra: Unrisd, 1986), especialmente los capítulos 3, 4 y 5.

de tal manera que la "Institución Policiaria" ('policíaria' no es un mal término; 'carabinero'—es en cambio de origen italiano) deviene parte del Partido y no parte de la estructura funcional del estado; el organismo está al servicio de la represión y la persecución. La naturaleza antidemocrática del partido revolucionario subordina a su propia voluntad las funciones regulatorias que, para su actividad anónima y desinteresada, debieran estar libres de toda coerción, aunque supeditada a la autoridad legal e independiente de los poderes estatales (Legislativo, Judicial). Sin embargo, el clima revolucionario no permite la profundización de democracia alguna (las tres administraciones movimientistas, 1952--1964, se ven como convenios de bandos al estilo del PRI mexicano en las primeras décadas de su apogeo), y todo se hace en base a la militante lealtad hacia el gobierno de turno. De hecho, se habla de la profundización del programa revolucionario, pero no de la democratización de la sociedad.

Nota Nueve

Nos quedan, ya casi a manera de conclusión, dos párrafos más. El penúltimo dice: *"Con asistencia del Jefe de la Revolución Nacional y Presidente constitucional de la República Dr. Víctor Paz Estenssoro, han sido clausuradas las sesiones de autocrítica en que altos personeros de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos y Técnicos [sic] de la entidad se han reunido a fin de encaminar por mejores rumbos las actividades de esta institución autárquica, con miras a la mejor y mayor producción de carburantes, cuyo beneficio exclusivo será para todo el pueblo boliviano. De esta manera la Revolución nacional va cumpliendo sus más caros objetivos". ¿Sesiones de autocrítica?"* Esta frase no se había escuchado por varias décadas en Bolivia. Al leerla uno admira el tesón revolucionario. El ímpetu es evidente. Hasta es posible recordar dos textos críticos: el del malogrado Sergio Almaráz Paz (Zavaleta Mercado dijo que Almaraz Paz "había muerto de bolivia"), *Petróleo en Bolivia* (1957) cuyo epílogo llama a los estudiantes bolivianos "a nacionalizar al gobierno", y el de Marcelo Quiroga Santa Cruz, tan conocedor de estas problemáticas de la desnacionalización del petróleo (1967), y de la indemnización de la Gulf (1970). Surge la interrogante: ¿Salvó el petróleo a Bolivia?

Nota Final

El párrafo de despedida afirma: *"En miras al autoabastecimiento de nuestra población y como medida para evitar el drenaje de divisas, dentro del plan de fomento e industrialización, el gobierno del Dr. Víctor Paz Estenssoro,*

por medio de los personeros del Banco Central, el viernes 31 del pasado mes de julio [1953] se ha firmado el contrato para la adquisición del primer ingenio azucarero que será establecido en la Provincia Montero del Departamento de Santa Cruz". Naturalmente, la transformación económica del país dependía de la capacidad de diversificar la economía nacional. A la distancia de cincuenta años se puede apreciar desde el presente la estrechez de las opciones. El país hasta entonces se había caracterizado por su capacidad monoprodutora, la demasiada dependencia del "metal del diablo" y la industrialización de una minería 'hecha a mano'—comparable solamente a las condiciones de explotación de las minas inglesas de carbón a fines del siglo diecinueve—como afirmara una visita de mineros de la TUC inglesa (Trades Union Congress)—a las minas de Siglo XX en los años 1970s—apenas pudo haber generado un eslabón débil en el gran esquema del sistema capitalista de entonces. El petróleo y el azúcar se verían como posibles alternativas para el funcionamiento del país. De ellos, el petróleo se transformaría en un posible área estratégica de producción contra la agricultura que tenía poca o nada posibilidades de competir en el mercado internacional. De hecho, el propósito del Plan [Mervin L] Bohan (1941-1942) implícitamente otorgaba a los banqueros estadounidenses—en un cincuenta por ciento—el privilegio de nombrar directores de la nueva institución desarrollista, la Corporación Boliviana de Fomento, CBF. De éstos dependería la CBF, llamada a organizar y ejecutar el tal Plan Bohan; ésta posicionaría a Bolivia como un apéndice o instrumento del sistema estadounidense (se sabe que el estaño boliviano fue capaz de fundar todo un pueblo en un lugar de Texas y que se llama Texas City). Con el tiempo, los enunciados revolucionarios del 52 caracterizarían la experiencia social boliviana de "populista" y la ubicarían junto a similares regímenes históricos de idénticas aspiraciones: Lázaro Cárdenas en México, Gustavo Rojas Pinilla en Colombia, Getulio Vargas en Brasil, y naturalmente Paz Estenssoro en Bolivia. Estas revoluciones sociales fueron modernizadoras, pero la modernización también reconstruyó paulatinamente la desigualdad socio-económica y creó otra estratificación social de exclusiones cuyo perfil es visible hoy en día. FIN

Bibliografía

- Albó, Xavier
1979 ¿Bodas de plata?: o, Requiem por una reforma agraria; comentarios de Fernando Calderón, Carlos Quiroga, Alfonso Camacho. La Paz : Centro de Investigación y Promoción del Campesinado, 1979. 105 p.
- Almaráz Paz, Sergio.
1958 Petróleo en Bolivia. La Paz : Editorial Juventud, 1958. 292 p.
- Almaraz Paz, Sergio [y] René Rocabado.
1958 Petróleo: Soberanía o dependencia. Cochabamba : Mercurio, 1958. 90
- Arauco, Maria Isabel.
1984 Mujeres en la Revolución Nacional : Las Barzolas La Paz: Distribucion, CINCO, [1984] 141 p.
- Ardaya, Gloria.
1983 Las barzolas y el Comité de Amas de Casa. La Paz : Centro de Investigación y Consultoría/Serie Estudios Sociales
- Brill, William H.
1967 "Military Intervention in Bolivia: The Overthrow of Paz Estenssoro and the MNR. Political Studies Series Vol 3. Washington.
- Bolivia. Congreso Nacional. Cámara de Diputados.
1967 Desarrollo con soberanía; la desnacionalización del Petróleo. Cochabamba [Editorial Universitaria] 1967. 135 p.
- Delgado González, Trifonio
1984 Cien Años de Lucha Obrera en Bolivia. La Paz: ISLA, 1984, pp.124-134.
- Gallego, Ferrán
1992 Ejército, Nacionalismo y Reformismo en América Latina. La Gestión de Germán Busch en Bolivia. Barcelona: Promociones y Publicaciones Universitarias, pp. 31-101.
- Kelley, Jonathan y Herbert S. Klein
1981 Revolution and the Rebirth of Inequality. A Theory Applied to the National Revolution in Bolivia. Berkeley: University of California, pp.182-184.
- Kohl, James
1977 "Antonio Mamani Alvarez: A Call to Bolivian Indians". Journal of Peasant Studies, Vol. IV (4), July: 394-397
- Mesa Gisbert, Carlos D.
1993 "Una visión política de Bolivia en el Siglo Veinte". EN: Mario Miranda Pacheco (compilador). Bolivia en la hora de su Modernización. México: UNAM, pp. 311-327.

Monsiváis, Carlos

1980 [1989] "La pasión de la Historia". En: Carlos Pereyra, et al. Historia: ¿Para Qué? México: Siglo XXI, pp. 169-193

Quiroga Santa Cruz, Marcelo

1970 Acta de transacción con Gulf; Análisis del Decreto de Indemnización a Gulf. La Paz: spi. 54 p.

Quiroga Santa Cruz, Marcelo

[1964] La victoria de abril sobre la Nación. La Paz, Bolivia. spi. 59 p.

Zavaleta Mercado, René

1982 "El proletariado minero en Bolivia entre 1940 y 1980". Boletín de Estudios Latinoamericanos y del Caribe. (Amsterdam) Vol 32: 29-38

Zalles, Alberto

2003 "Campesinos "sin tierra": el ciclo de la minifundización agraria en Bolivia. Bolivian Research Review, Vol 5 (www.bolivianstudies.org)

Zemelman M. Hugo

2000 "La historia se hace desde la cotidianidad". EN: Heinz, Dietrich, Enrique Dussel, et al. El Fin del Capitalismo Global. El Nuevo proyecto Histórico. México: Oceano, pp. 153-165.

LECTURA

"Recordar Engendrando: "De la ventana al parque", de Jesús Urzagasti".

✉: Prof. Alvaro Romero Marco
Departamento de Lenguas
Universidad de California Santa Cruz

Actualmente, Alvaro Romero Marco es profesor de la Universidad de California en Santa Cruz en la que enseña desde hace tres años. Además de dedicarse a la enseñanza de lengua y literaturas españolas, es estudioso de la Literatura del Exilio Republicano Español. En 1994 recibió el Primer premio de poesía Miguel Nuñez. En 1997 publicó *"El pretendiente"* que es hasta el momento su única novela. La Fundación Max Aub le concedió la Beca de investigación *"Max Aub: Hablo como hombre el año 2000"*.

En esta época de alergias y amnesias hacia todo aquello que tenga que ver con el recuerdo; en esta época de tergiversaciones de la Historia, de falsos humanismos y de nacionalismos radicales, que un autor encare el tema de la memoria es, sencillamente, valiente. Como todo aquel que, aquí y ahora, se niega a olvidar su pasado, Jesús Urzagasti se sabe solo, pero no le importa. Porque él se siente humanamente solo y sabe escribir novelas como *De la ventana al parque*. Una obra bella en la que las grandes palabras (vida, muerte o recuerdo) son pronunciadas tan inspiradamente que redoblan su misterio. "La última vez que vi a mi tío Honorato", así empieza esta extraordinaria novela, "estaba revocando la covacha donde acababa de ser enterrado su hermano Segundo". A los quince días Honorato muere en Buenos Aires y el sobrino, en lugar de entristecerse, recuerda su amistad con Cristino Cataldi. Todo un logro el de recordar engendrando.

Se ha dicho muchas veces que la memoria, como los sentimientos, es selectiva. Sobradamente conocido es el olfato de Proust o la piel en carne viva de Sade y no sería Kafka tan universalmente kafkiano sin esa matutina aparición de la cucaracha en el baño. Hay memorias que tienen su fuente empírica en la vida y otras, como la de Jesús Urzagasti o la de Juan Rulfo, en la naturaleza propia de la memoria. Jesús Urzagasti no recuerda para revivir una experiencia, ni lo hace para reflexionar sobre un fragmento patrio o "panpatriado", sino por instinto metafísico, y digo instinto porque para mí es evidente que se lo pide el cuerpo. De ahí que *De la ventana al parque* sea una novela de resucitados, como bien a las claras lo deja ver su proceso creativo. El narrador se encierra en su habitación y recuerda. En las paredes hay dibujos, pinturas, fotografías, y no ignora que esos objetos son abridores de senderos pasados. Los objetos poseen vida

anímica, son resurrecciones que alumbran, no las autopistas de la desmemoria, sino los vericuetos de la memoria para que el poeta escriba las historias espirituales de un montón de muertos.

¡La muerte! La ocultación de la muerte en casa y su constante y sistemática propagación en la del vecino: otra de las grandes falacias de la cultura occidental moderna. La concepción del presente sin pasado. Del presente como una cómoda forma de futuro descerebrado y ególatra que ayuda a que el resto del mundo naufrague entre guerras y miserias. ¿Y el humanismo? ¿Dónde el cacareado humanismo? Tal vez se encuentre en otras latitudes, entre otras gentes para las que la vida únicamente tiene sentido cuando está proyectada sobre la pantalla de la muerte. De esta forma lo dice el narrador de esta novela honda: "Ninguno se conoció, lo cual no impide suponer que tales hechos tengan algún grado de verosimilitud, porque los muertos se adjudican todas las posibilidades que los vivos han perdido". Cree Jesús Urzagasti que sólo en la memoria de los muertos hay posibilidades. Porque los vivos son carne de determinismo. Son una u otra cosa, incluso cambian, pero siempre lo hacen dentro de lo establecido o de mil perniciosas leyes no escritas. La única forma de liberarse de esa condena es la muerte entendida como memoria narrándose, completándose. Así los personajes de esta novela poseen rasgos peculiares, pero sólo alcanzan la madurez cuando, una vez muertos, el narrador los recuerda y contrasta con otros personajes que conocieron o no conocieron. En vida son personajes fragmentarios, misterios vivientes que una vez muertos y recordados se transforman en realidades henchidas de posibilidades. Y es así como surge la concepción humanista de la vida, cuando sólo es una gran suerte de posibilidad que únicamente la muerte, es decir la memoria creciéndose, puede llegar a concretizar.

He aquí, en definitiva, una novela virtual. He aquí la reivindicación literaria de un nuevo humanismo. He aquí un mundo implícito y tácito, cierto es, pero con la gran virtud de producir un efecto real: el de la necesidad de los muertos. Toda la novela es una hermosa hipótesis. Es la suposición de que de algo posible—o no posible—se puede sacar una consecuencia que, en este caso, no es otra que la necesidad de la memoria como forma de humanización. Pero esto, con ser valioso, no lo sería tanto si no estuviera escrito con una voz tan personal y atrayente. Con un estilo tan ágil y diáfano literario. Hay escritores que poseen más tintes en la paleta de su vocabulario. Hay otros que saben registrar

con mayor exactitud las hablas y modos de sus personajes; pero ciertamente es escaso el número de escritores que, como Jesús Urzagasti, logran un acento tan revelador de misterios. "Inteligencia, dame el nombre exacto de las cosas", escribió, ya al final de su pureza, Juan Ramón Jiménez. Al novelista boliviano y fronterizo, las palabras se las manda el recuerdo para que él, transformado en sabio demiurgo, las modele con destreza.

Santa Cruz, California, Mayo del 2003